



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

En cuatro de marzo de dos mil veinte, el secretario de acuerdos da cuenta a la presidenta del tribunal, con las copias del auto de diez de febrero del presente año, boleta de turno y la impresión de los acuses de envío y recibo enviados por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del sistema MINTERSCJN. Conste.

Ciudad de México, cuatro de marzo de dos mil veinte.

Visto el acuerdo de cuenta, **fórmese expediente de contradicción de tesis.**

Este tribunal queda enterado, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por presentada la posible contradicción de tesis 46/2020, denunciada por los magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

La denuncia se efectúa, por lo que hace a este tribunal, respecto del criterio emitido al resolver el recurso de revisión RC.214/2019, donde se determinó que en los juicios mercantiles, las instituciones de crédito no se encuentran exentas de garantizar los daños y perjuicio que puedan ocasionar al deudor con la imposición de medidas precautorias.

Se informa que a la fecha, este tribunal no se ha apartado del criterio emitido en el recurso de revisión RC.214/2019; sin embargo, en la sentencia dictada en el recurso de revisión RC.308/2019 de más reciente fecha se reiteró el criterio, con diferente integración, y se expusieron razones distintas para considerar porque las instituciones de crédito no están exentas de garantizar los daños y perjuicios en las medidas cautelares.

Remítase al correo proporcionado versión digitalizada de las resoluciones dictadas en los recursos de revisión mencionados y del presente acuerdo.

Cúmplase.

Así lo proveyó y firma la magistrada **María Amparo Hernández Chong Cuy**, presidenta del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ante el secretario de acuerdos, que autoriza y da fe

muy *doc 3.*



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

23
AMPARO EN REVISIÓN: RC-214/2019

RECURRENTE: [REDACTED]

(QUEJOSO)

PONENTE: MAGDO MAURO MIGUEL REYES ZAPATA
SECRETARIO: RAMIRO IGNACIO LÓPEZ MUÑOZ

Ciudad de México, a veintiuno de agosto de dos mil diecinueve.

V I S T O S, los autos del toca RC-214/2019, para resolver el recurso de revisión interpuesto por [REDACTED]

[REDACTED] por conducto de su apoderado [REDACTED] en contra de la sentencia de siete de junio de dos mil diecinueve, engrosada el trece siguiente, por la Juez Primera de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, que negó la protección constitucional en el juicio de amparo indirecto 401/2019-V, y

RESULTANDO:

PRIMERO. Juicio de amparo indirecto. [REDACTED]

[REDACTED] por conducto de su apoderado [REDACTED] demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el siguiente acto:

➤ De la Juez Octava de lo Civil de Cuantía Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la resolución de dos de abril de dos mil diecinueve, dentro del

expediente 1992/2018, que resolvió el recurso de revocación en el que, pese a revocar el auto recurrido, determinó que el banco actor debía dar cumplimiento al requisito previsto en el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, relativo al otorgamiento de la garantía por los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar a los presuntos deudores, por lo que previno a [REDACTED] a efecto de que:

1. Exhibiera la garantía que se fijó de forma prudente y discrecional por \$19,478.24 (diecinueve mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 24/100 M.N.) con fundamento en el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio.

2. Indicara el lugar en el que hubiera que seguir el juicio que pretende iniciar, para el efecto de fijar el término a que hace referencia el artículo 1181 del Código de Comercio.

3. Exhibiera copia simple de dicho cumplimiento.

El acto reclamado fue estimado violatorio de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.

II. Sustanciación, admisión y audiencia constitucional. Correspondió conocer del asunto a la Juez Primera de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en donde se registró con el número 401/2019-V, y se admitió a trámite mediante acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado.

La audiencia constitucional se celebró el siete de junio de dos mil diecinueve y se engrosó el trece siguiente, en la que se negó la protección constitucional.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

024

III. Oportunidad del recurso de revisión. La sentencia fue notificada a la quejosa personalmente el catorce de junio de dos mil diecinueve y surtió efectos el diecisiete siguiente.

El plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión, transcurrió del dieciocho de junio al uno de julio de dos mil diecinueve.

El escrito de revisión se presentó el último día del plazo previsto para ello.

SEGUNDO. Tramitación y sustanciación del recurso de revisión. El juzgado de distrito remitió el recurso; así como los autos relativos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Circuito.

Correspondió conocer del recurso a este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, donde se admitió a trámite por acuerdo de presidencia de quince de julio de dos mil diecinueve; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento.

Finalmente, mediante proveído de doce de agosto siguiente, el asunto se turnó al magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, con lo que el asunto se puso en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este tribunal es competente para conocer del presente negocio, en conformidad con los artículos 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y

límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente desde el veintitrés de enero de dos mil trece, por tratarse de recurso de revisión interpuesto contra la resolución pronunciada por juez de distrito en este circuito.

SEGUNDO. Consideraciones de la resolución impugnada.

"Cuarto. (Estudio de fondo) (...)

Para una mejor comprensión del tema, conviene precisar algunos antecedentes del juicio del cual deriva el acto reclamado, los que se advierten de las documentales remitidas por la juez responsable al momento de rendir el informe con justificación solicitado y que han sido valoradas con anterioridad.

1. Por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, [REDACTED]

[REDACTED] por conducto de su apoderada, promovió providencias precautorias de retención de bienes dirigidas a [REDACTED]

[REDACTED] como presuntos demandados, respecto de lo siguiente: (fojas 1 a 10 del tomo I de pruebas).

(...) 1. Retención de dinero que se encuentre depositado en cuentas bancarias. Mi representada solicita la retención de bienes propiedad de la acreditada [REDACTED] con clave del Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] y del obligado solidario [REDACTED] con clave del Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] a efecto de garantizar el pago de la cantidad de \$157,970.70 (ciento cincuenta y siete mil novecientos setenta pesos 70/100 moneda nacional) monto total adeudado al uno de junio de dos mil dieciocho, sobre el dinero que se encuentre en cuentas bancarias, de inversión o de cheques, productos de nómina (moneda nacional y/o



025

cualquier moneda extranjera) así como las joyas, títulos de crédito y valores en general depositados son cajas de seguridad que se encuentren contratadas con las instituciones de crédito y/o financieras y casas de bolsa, que integran el Sistema Financiero Mexicano; así como la retención sobre los valores a que se refiere el artículo 2, fracción XXIV de la Ley de Mercado de Valores. (...).

2. El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, la juez del conocimiento no dio trámite a las providencias solicitadas, bajo el argumento toral de que el banco promovente tiene en su poder documentos que en su conjunto forman título ejecutivo, con los que en cualquier momento puede iniciar el juicio respectivo, en donde se cuenta con una medida cautelar especial que daría oportunidad a los demandados de señalar bienes para embargo al momento de la diligencia, por lo que no proceden las providencias precautorias solicitadas, pues se vulnerarían los derechos humanos de los presuntos demandados, ya que hay formalidades que se deben seguir para otorgar dichas providencias que se apartan de la ejecutividad de los documentos en que basa su petición, aunado a que se deben identificar los bienes objeto de la providencia solicitada con toda claridad y no de manera genérica, teniendo certeza de su existencia, pero no lo hizo y, por tanto, no procede afectar bienes de los presuntos demandados de manera genérica, por no contemplarlo así la legislación aplicable (fojas 52 a 54 del tomo I de pruebas).

3. Inconforme con el proveído señalado en el punto que antecede, el aquí quejoso interpuso recurso de revocación, el cual resolvió la juez responsable el seis de diciembre de dos mil dieciocho y confirmó el auto recurrido (fojas 66 a 72 del tomo I de pruebas).

4. Nuevamente inconforme con dicha resolución, el banco hoy quejoso promovió el juicio de amparo indirecto 11/2019-V, en el que previa admisión y trámite, se concedió la



COLEGIATO
PRIMER CIRCUITO
DE MÉXICO

230 protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que la juez responsable realizara lo siguiente: (fojas 68 a 71 del tomo II de pruebas).

(...) 1) Deje insubsistente la resolución de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 1992/2018, de su índice.

2) Con libertad de jurisdicción, pronuncie una nueva resolución siguiendo los lineamientos expuestos en el presente fallo, exponiendo los razonamientos jurídicos conforme a los cuales determine lo que conforme a derecho proceda en relación a las providencias precautorias solicitadas por la institución bancaria quejosa, al haber acreditado los supuestos a que hacen alusión las fracciones I a III del artículo 1,175 del Código de Comercio.

3) En caso de que determine procedente conceder las providencias precautorias solicitadas, deberá determinar que la retención de bienes no exceda a la cantidad referida en la certificación de adeudo exhibida, así también deberá realizar el pronunciamiento correspondiente a si es o no procedente fijar la garantía prevista en el artículo 1175 del Código de Comercio.
(...).

5. En cumplimiento a dicho fallo protector, el dos de abril de dos mil diecinueve, se revocó el auto recurrido y se requirió al banco quejoso para que en un término perentorio cumpliera con la prevención siguiente: (fojas 75 a 83 del tomo I de pruebas).

(...) se previene a la presunta actora a efecto de que realice la (s) aclaración (es) siguiente (s): 1) deberá garantizar de conformidad con lo previsto por el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, por cualquiera de los medios permitidos por la ley los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar con la concesión de la medida precautoria, y cuya garantía se fija de forma prudente y discrecional tomando en consideración la información al efecto proporcionada en el escrito inicial, en la cantidad de \$19,478.24 (diecinueve mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 24/100 m.n.); 2) de igual forma deberá indicar en su caso el lugar en que hubiere de seguirse el juicio que pretende iniciar, lo anterior a efecto de estar en

CINCO
EN MATERIA
19/04/19



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

026

posibilidad de fijar el término a que hace referencia el artículo 1181 del Código de Comercio, dado el domicilio proporcionado como de los futuros demandados y 3) finalmente deberá exhibir copia simple por duplicado del curso en el que desahogue su prevención, la cual formará parte del traslado respectivo; por lo que se concede a la promovente de las providencias precautorias tramitadas, el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que el presente proveído surta sus efectos por Boletín Judicial, a fin de que desahogue la prevención decretada, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término señalado, no se dará trámite a las providencias planteadas. (...).

6. El dos de mayo de dos mil diecinueve, la juez de origen tomó conocimiento de que con la resolución que antecede, se declaró cumplida la ejecutoria de amparo descrita en el numeral cuatro, para todos los efectos legales a que hubiere lugar (fojas 77 y 78 del tomo II de pruebas).

Este es el estado procesal que guarda el juicio del que deriva el acto reclamado en el presente asunto.

El hoy quejoso aduce, medularmente en sus conceptos de violación, lo siguiente:

- Que la autoridad responsable vulneró en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, por no respetar los principios de legalidad, fundamentación, motivación y debida interpretación de la ley que toda determinación jurisdiccional debe tener, ya que pasó por alto que se encuentra exenta de exhibir garantía al ser el banco promovente una institución de acreditada solvencia económica, perteneciente al Sistema Financiero Mexicano, en términos del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito.

- Alega que debe prevalecer lo establecido en la norma especial, Ley de Instituciones de Crédito, sobre la norma especial (sic) del Código de Comercio.

NAL. CARRANZO
EL PRIMER CARRANZO
D DE MEXICO

- Que conforme a lo previsto por el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, los integrantes del sistema bancario mexicano no están obligados a otorgar garantía, al presumirse su solvencia.

- Que si bien es cierto que la fracción V, del artículo 1175 del Código de Comercio prevé que la parte que promueva las providencias precautorias, debe garantizar los posibles daños y perjuicios que se le puedan ocasionar a los futuros codemandados en caso de que la demanda no sea presentada en tiempo y forma, o bien, en caso de que éste sea absuelto de las prestaciones que al efecto se le reclamen, también es cierto que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito prevé la excepción a dicha norma.

El concepto de violación expresado por el hoy quejoso y sintetizado en los puntos que anteceden, resulta infundado, como a continuación se puntualizará.

En primer lugar, resulta importante señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra, entre otras, la garantía de legalidad a favor de los gobernados, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; ésta forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan.

Sobre lo indicado, cabe destacar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, que en lo relativo señalara



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

que: 'Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.'

Así, el contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad de manera que sea evidente y claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.

Para satisfacer el principio de seguridad jurídica, la Constitución Federal establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, de las formalidades del acto, y legalidad, entendida la fundamentación como el deber de la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; por su parte, la motivación, consiste en la expresión de las razones por las cuales considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar.

Presupuestos (el de fundamentación y motivación) que deben coexistir y se presuponen mutuamente, pues no es dable citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones.

Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los

motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate.

Tiene aplicación, la jurisprudencia con registro IUS 238212, de la segunda sala del alto tribunal, publicada en la página 143, Tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. (Se transcribe).

Así como la jurisprudencia VI.2o.J/43, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo III, marzo de 1996, página 769, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. (Se transcribe).

Para respetar la garantía de fundamentación y motivación, necesariamente la autoridad responsable debe determinar con toda precisión el precepto o los preceptos legales que servirán de sustento a la determinación que emita; además, exponer las razones particulares y causas inmediatas que tomó en consideración para llegar a tal conclusión, pues únicamente así el interesado tendrá las bases para fijar su defensa.

Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad; la falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa; en cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la



CUARTO TRI
EN MATERIA CIVIL
TOMO III



autoridad expresa razones para emitir su acto, empero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa o bien ésta se interpreta en forma errónea.

Es aplicable la tesis de jurisprudencia 47, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, página 1964, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR.¹ (Se transcribe).

En tercer lugar, conviene destacar las consideraciones vertidas en la resolución de dos de abril de dos mil diecinueve (fojas 75 a 83 del tomo I de pruebas) que en lo que aquí interesa, son del tenor siguiente:

(...) Por otra parte y en relación al requisito relativo a garantizar los daños y perjuicios que la providencia precautoria pueda ocasionar al deudor, de conformidad con lo previsto por el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, la presunta actora se encuentra obligada a garantizar los posibles daños y perjuicios que en su caso se generen, pues no obstante que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, señala que los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no están obligados a constituir depósitos o fianzas legales dada su acreditada solvencia económica, también lo es que dicho precepto no es susceptible de constituir una excepción a la regla contenida en el artículo 1175 del Código de Comercio, el cual establece que siempre que puedan ocasionarse daños y perjuicios al deudor en tratándose de providencias precautorias, el solicitante se encuentra obligado a garantizar los mismos; consecuentemente al encontrarse tal supuesto regulado en una norma de carácter general (Código de

¹ Registro: 170307.

620
Comercio) el mismo no puede quedar subordinado a una disposición contenida en una ley que se encuentra en contradicción con la referida norma general, pues los mandatos de ésta, con lo que deben regir la interpretación y aplicación de cualquier otra ley en cuanto al procedimiento relativo a las providencias precautorias, por encontrarse específicamente reguladas en este instrumento normativo, ello con la finalidad de no hacer nugatorias las disposiciones del citado ordenamiento legal; máxime que la circunstancia de que la presunta actora por ser integrante del Sistema Bancario Mexicano se considere de acreditada solvencia, ello no exime de la obligación de garantizar los posibles daños y perjuicios que se generen dentro de un procedimiento de carácter judicial, pues en el mismo no se está en controversia la solvencia o no de la Institución Bancaria. (...).

De lo que se colige, que la juez responsable dio cumplimiento a la concesión de amparo descrita en el punto cuatro de la relatoria de constancias efectuadas con antelación y, modificó el auto recurrido de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, para que el banco hoy quejoso desahogara la prevención efectuada, que en lo que aquí interesa, corresponde a la procedencia de fijar la garantía prevista en el artículo 1175 del Código de Comercio, respecto de la cantidad de \$19,478.24 (diecinueve mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 24/100 moneda nacional) a efecto de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida que llegare a otorgarse de retención de bienes propiedad de [REDACTED] en los términos descritos en dicha resolución.

Por lo que aun cuando la promovente solicitó la imposición de la providencia sin que se le exigiera la aludida garantía, ello no puede concederse de conformidad, pues no puede quedar al arbitrio de la solicitante la exhibición de la garantía, aunado a que en el presente asunto procede la aplicación de la norma especial sobre la general, misma que



contempla de forma clara y completa lo relativo a dicho tópico.

029

Proceder que contrario a lo sostenido por el aquí quejoso, la suscrita juzgadora encuentra conforme a derecho, pues el Código de Comercio, regula los requisitos que habrá de cumplir la solicitante de la medida precautoria, sin que prevea ninguna excepción atendiendo a la calidad de la persona que solicite la medida ni a otra circunstancia, además de que es verdad que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, no resulta aplicable al no estar inmerso en la ley especial (Código de Comercio) que regula los procedimientos mercantiles.

Lo anterior, ya que en los casos en que resulte procedente decretar una providencia precautoria por actualizarse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 1168 del Código de Comercio, la parte que lo solicite debe cumplir, necesariamente, con el requisito de eficacia a que se refiere la fracción V, del artículo 1175 del citado ordenamiento que a la letra dice:

Artículo 1175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos:

(...)

V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte.

El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante.

Como puede advertirse de la porción normativa transcrita, la procedencia de las providencias precautorias queda condicionada a que se cumpla el requisito indispensable,

ESD consistente en que la parte que lo solicite garantice los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida al deudor en cualquiera de los supuestos previstos en la propia ley.

Esa norma regula de manera específica los requisitos que habrá de cumplir la parte que solicite la medida precautoria, la cual no prevé ninguna excepción atendiendo a la calidad de la parte que la solicita ni a ninguna otra circunstancia.

Lo anterior, nos lleva a establecer que con independencia de la acreditada solvencia con que cuenta la institución bancaria quejosa, tratándose del procedimiento de solicitud de medidas precautorias, el solicitante está obligado, en todos los casos, a garantizar los daños y perjuicios a que se refiere el numeral en estudio, como acertadamente lo destacó el juez primigenio en la resolución que se analiza.

Sin que constituya obstáculo a lo anterior, lo alegado en el sentido de que el contenido del numeral 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, se complementa con el 1175, fracción V, del Código de Comercio y que por ello el aquí quejoso no se encuentra obligado a exhibir la garantía solicitada por el juez responsable.

En la especie resulta conveniente citar el contenido de los artículos 1º y 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, que en su orden establecen:

‘Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito; la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito; las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar; su sano y equilibrado desarrollo; la protección de los intereses del público; y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano.’

‘Artículo 86. Mientras los integrantes del

CUARTO
EXAMENADO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos.

030

Conforme al primero de esos numerales, la Ley de Instituciones de Crédito fue creada para regular el Sistema Bancario en México en todo lo concerniente a la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, así como su sano y equilibrado desarrollo.

Empero, ello es independiente de las reglas procesales que rigen los juicios y procedimientos mercantiles en los que un banco sea parte, y no permea en las relaciones que, a nivel de particular tiene el banco con las personas físicas o morales con quienes tenga tratos comerciales.

En ese sentido, la aplicación de la regla general establecida en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito que otorga a las instituciones bancarias que no estén en liquidación o en procedimiento de quiebra, la presunción de que tienen acreditada solvencia y que por ello no estarán obligadas a constituir depósitos o fianzas legales; sin embargo, no es aplicable al no estar inmersa en la ley especial que regula los procedimientos mercantiles, como es el Código de Comercio, en el que se impone como requisito de efectividad a quien solicite una providencia precautoria, que exhiba necesariamente una garantía por tanto, no se puede aplicar al no pertenecer al sistema normativo que regula la procedencia y requisitos para el otorgamiento de las providencias precautorias.

Cabe mencionar que las normas especiales, como en el caso lo es el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio,

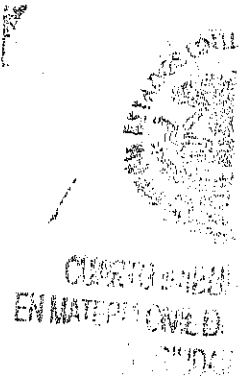
080 excluyen la aplicación de las normas generales, como lo es el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito; de lo que se sigue que tratándose de normas procesales, se debe estar a lo que expresamente dispongan las primeras al momento de regular la procedencia de los juicios o procedimientos de que se trate.

Máxime que en el caso se estima aplicable el criterio de especialidad (que se sustenta en que la ley especial substrahe una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentación diversa); en virtud que, la colisión de normas referida entre lo establecido en una norma general (Ley de Instituciones de Crédito) y una norma especial que regula el tema de las providencias precautorias solicitadas (Código de Comercio) que no guardan una relación jerárquica entre sí.

De ahí que, aun y cuando el aquí quejoso pertenezca al Sistema Bancario Mexicano, no menos cierto es que, en la regulación de las medidas precautorias existe disposición expresa de que el solicitante de la medida debe exhibir como requisito de procedencia de la misma, garantía para responder de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al deudor, sin hacer excepción alguna; lo que, se insiste, constituye una norma especial, al regular de manera concreta y específica la figura de las medidas precautorias, en tanto que, el numeral de la Ley de Instituciones de Crédito, referido por el peticionario de amparo y transcrito en párrafos que preceden, resulta una norma genérica, al no referirse a un caso en particular.

Además, lo anterior también encuentra su razonabilidad, en que con la medida precautoria que se solicita antes de juicio con el fin de afectar bienes propiedad de [REDACTED]

[REDACTED] puede generar afectaciones graves a su patrimonio, pues se les secuestran bienes sin previa audiencia; lo





que de suyo hace necesario que se rija por las disposiciones que permiten la reparabilidad integral de afectación que pudiera conllevar el otorgamiento que regula las providencias precautorias solicitadas; de ahí lo infundado del concepto de violación formulado.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.130.A.16 K, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, visible en la página 1391, que es de este tenor:

'SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA BANCARIO MEXICANO DEBEN CONSTITUIR GARANTÍA PARA OBTENERLA.'² El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que el juicio de amparo se sujetará a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley. Lo anterior implica que todas las reglas que rigen al juicio de garantías deben estar contenidas en un solo ordenamiento pues, de lo contrario, se llegaría al extremo de que cada ley pudiera establecer la forma en que su propio contenido y los actos de ella derivados se deben someter al control de constitucionalidad que representa el juicio de amparo. Por tanto, si bien es cierto que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito señala que los integrantes del Sistema Bancario Mexicano no están obligados a constituir garantía para obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo, dada su acreditada solvencia económica, también lo es que dicho precepto, por estar previsto en una ley diversa a la Ley de Amparo, no es susceptible de constituir una excepción a la regla general contenida en el artículo 125 de dicho ordenamiento, el cual establece que siempre que puedan ocasionarse daños y perjuicios a terceros, el quejoso deberá constituir garantía para obtener la suspensión del acto reclamado.'

Asimismo, cobra aplicación, por analogía, la tesis IV.30.52 L, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del

² Registro: 186108

Cuarto Circuito, que se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, visible en la página 798, que refiere:

‘SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO. NO ESTÁN EXENTAS DE PRESENTAR EN LA DILIGENCIA DE REMATE EL BILLETE DE DEPÓSITO POR EL IMPORTE DEL DIEZ POR CIENTO DE SU PUJA.’³

Las sociedades nacionales de crédito están obligadas a exhibir ante la Junta, en el momento del desahogo de la diligencia de remate, su postura por escrito, así como el billete de depósito de Nacional Financiera que ampare el diez por ciento de su puja, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 970 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que dicho numeral no exceptúa del cumplimiento de sus extremos a persona alguna, ni física ni moral; sin ser obstáculo para la satisfacción del precepto citado el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que mientras los integrantes del sistema bancario mexicano no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, en virtud de que para ser tomada en cuenta esta disposición se requiere que no haya precepto expreso en la ley de la materia aplicable al caso, de conformidad con el artículo 17 de la citada ley laboral, independientemente de que la exigencia de otorgar garantía dentro de la audiencia de remate, emana de la legislación laboral, la cual es reglamentaria del artículo 123 constitucional y, por ende, no pueden subordinarse los preceptos de la ley laboral a un ordenamiento diverso.

También se cita, en lo conducente, la tesis I.4o.C.220 C, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2788, Tomo XXXI, febrero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente:

‘ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES.’

³ Registro: 197645.



CRITERIOS DE SOLUCIÓN.⁴ La antinomia es la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea. Antes de declarar la existencia de una colisión normativa, el juzgador debe recurrir a la interpretación jurídica, con el propósito de evitarla o disolverla, pero si no se ve factibilidad de solucionar la cuestión de ese modo, los métodos o criterios tradicionales de solución de antinomias mediante la permanencia de una de ellas y la desaplicación de la otra, son tres: 1. criterio jerárquico (*lex superior derogat legi inferiori*), ante la colisión de normas provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical o dispuestas en grados diversos en la jerarquía de las fuentes, la norma jerárquicamente inferior tiene la calidad de subordinada y, por tanto, debe ceder en los casos en que se oponga a la ley subordinante; 2. Criterio cronológico (*lex posterior derogat legi priori*), en caso de conflicto entre normas provenientes de fuentes jerárquicamente equiparadas, es decir, dispuestas sobre el mismo plano, la norma creada con anterioridad en el tiempo debe considerarse abrogada tácitamente, y por tanto, ceder ante la nueva; y, 3. Criterio de especialidad (*lex specialis derogat legi generali*), ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la segunda, el criterio se sustenta en que la ley especial substrahe una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentación diversa (contraria o contradictoria). En la época contemporánea, la doctrina, la ley y la jurisprudencia han incrementado la lista con otros tres criterios. 4. Criterio de competencia, aplicable bajo las circunstancias siguientes: a) que se produzca un conflicto entre normas provenientes de fuentes de tipo diverso; b) que entre las dos fuentes en cuestión no exista una relación jerárquica (por estar dispuestas sobre el mismo plano en la jerarquía de las fuentes), y c) que las relaciones entre las dos fuentes estén reguladas por otras normas jerárquicamente superiores, atribuyendo -y de esa forma, reservando- a cada una de ellas una diversa esfera material de competencia, de modo que cada una de las dos fuentes tenga la competencia exclusiva para regular una cierta materia. Este criterio guarda alguna semejanza con el criterio jerárquico, pero la relación de jerarquía no se establece

⁴ Registro: 165344.

entre las normas en conflicto, sino de ambas como subordinadas de una tercera; 5. Criterio de prevalencia, este mecanismo requiere necesariamente de una regla legal, donde se disponga que ante conflictos producidos entre normas válidas pertenecientes a subsistemas normativos distintos, debe prevalecer alguna de ellas en detrimento de la otra, independientemente de la jerarquía o especialidad de cada una; y, 6. Criterio de procedimiento, se inclina por la subsistencia de la norma, cuyo procedimiento legislativo de que surgió, se encuentra más apegado a los cánones y formalidades exigidas para su creación. Para determinar la aplicabilidad de cada uno de los criterios mencionados, resulta indispensable que no estén proscritos por el sistema de derecho positivo rector de la materia en el lugar, ni pugnen con alguno de sus principios esenciales. Si todavía ninguno de estos criterios soluciona el conflicto normativo, se debe recurrir a otros, siempre y cuando se apeguen a la objetividad y a la razón. En esta dirección, se encuentran los siguientes: 7. Inclinar por la norma más favorable a la libertad de los sujetos involucrados en el asunto, por ejemplo, en el supuesto en que la contienda surge entre una norma imperativa o prohibitiva y otra permisiva, deberá prevalecer esta última. Este criterio se limita en el caso de una norma jurídica bilateral que impone obligaciones correlativas de derechos, entre dos sujetos, porque para uno una norma le puede ser más favorable, y la otra norma favorecerá más la libertad de la contraparte. Para este último supuesto, existe un diverso criterio: 8. En éste se debe decidir a cuál de los dos sujetos es más justo proteger o cuál de los intereses en conflicto debe prevalecer; 9. Criterio en el cual se elige la norma que tutele mejor los intereses protegidos, de modo que se aplicará la que maximice la tutela de los intereses en juego, lo que se hace mediante un ejercicio de ponderación, el cual implica la existencia de valores o principios en colisión, y por tanto, requiere que las normas en conflicto tutelen o favorezcan al cumplimiento de valores o principios distintos; y, 10. Criterio basado en la distinción entre principios y reglas, para que prevalezca la norma que cumpla mejor con alguno o varios principios comunes a las reglas que estén en conflicto. Esta posición se explica sobre la base de que los principios son postulados que persiguen la realización de un fin, como expresión directa de los valores incorporados al sistema jurídico, mientras que las reglas son expresiones generales con menor grado de abstracción, con las que se busca la realización de

COMUNICADO
EXTERNO
FOLIO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

los principios y valores que las informan; de manera que ante la discrepancia entre reglas tuteladas de los mismos valores, debe subsistir la que mejor salvaguarde a éste, por ejemplo si la colisión existe entre normas de carácter procesal, deberá resolverse a favor de la que tutele mejor los elementos del debido proceso legal.

Por tanto, la juez responsable en la resolución reclamada sí aplicó de manera exacta el contenido de los numerales 86 de la Ley de Instituciones de Crédito y 1175, fracción V, del Código de Comercio, por lo que su determinación, contrario a lo que alega el banco quejoso se encuentra debidamente fundada y motivada, resulta clara y precisa con las disposiciones legales aplicables, como se evidenció a lo largo del presente fallo, y no se violan sus derechos fundamentales, ya que cuenta con los requisitos establecidos en la Carta Magna, las cuales aseguran al gobernado que tanto el proceso legal, como todas las determinaciones de orden judicial sean realizadas siempre apegadas a las leyes y a las formalidades esenciales del procedimiento.

En esa virtud, ante la ineficacia jurídica del motivo de inconformidad vertido por el peticionario de amparo y como el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se advierte que se haya cometido contra el quejoso violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa que obligara a suplir la deficiencia de los conceptos de violación, de conformidad con lo estatuido en el dispositivo 79, fracciones I, II y VI, de la Ley de Amparo, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada."

TERCERO. Agravio. Es del tenor siguiente:

"Único. La postura del juzgador de amparo, quien niega la protección de la Justicia Federal a mi representada al

considerar que es inaplicable el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito para las pretensiones de mi representada en el juicio de origen, para que se le considere de acreditada solvencia, tal como la ley lo regula.

Fuente del agravio: La sentencia definitiva de trece de junio de dos mil diecinueve, en su cuarto considerando.

Queda de manifiesto que la resolución que se combate, pretende la inobservancia de una ley que fue creada para regular el servicio de banca y crédito al que mi poderdante pertenece, así como la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público, por lo que no es correcto que pretenda pasarla por alto.

Vale la pena reiterar, que mi representada es una institución de crédito de acuerdo al artículo 2 de la Ley de Instituciones de Crédito que señala:

'Artículo 2º. El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de crédito, que podrán ser:

I. Instituciones de banca múltiple y

II. Instituciones de banca de desarrollo.'

La Ley de Instituciones de Crédito es un ordenamiento de aplicación general en toda la República Mexicana y con todo lo que tenga que ver con las instituciones de crédito.

La presunción establecida en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito en la cual se establece que las instituciones de crédito gozan de acreditada solvencia, se traduce en que no están obligadas a exhibir garantías, fianza ni depósitos





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

siendo aplicable tal determinación a los juicios y procedimientos³⁴ mercantiles, para lo cual sólo necesita mi representada acreditar, como es en este caso, que es una institución de crédito, además tomando en cuenta lo señalado en el punto anterior, resulta aplicable el argumento señalado por mi representada en la demanda de amparo sobre que existe disposición expresa que señala que las instituciones que forman parte del Sistema Bancario Mexicano, queda exenta de exhibir garantía alguna, ya que se presume su acreditada solvencia, y si bien, esta se encuentra regulada en la Ley de Instituciones de Crédito, como ya se señaló desde el escrito del recurso de revocación y en la demanda de amparo, esta disposición es aplicable, en primer lugar de acuerdo a lo establecido en el artículo 1063, en el cual se señala: 'Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local,' y tomando en cuenta que las instituciones de crédito se rigen por lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito, la cual es una ley especial de comercio, por lo cual es aplicable a los juicios mercantiles; sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia:

'SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.'⁵

La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no

⁵ Décima Época, Registro: 2003161, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 34/2013 (10a.), Página: 1065.

contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.

La anterior jurisprudencia transcrita determinó que los requisitos necesarios para que opere la supletoriedad de una norma respecto de otra son:

- Que el ordenamiento que pretenda suplirse lo admita expresamente y señale la ley aplicable.
- Que la ley a suplirse contenga la institución jurídica de que se trata.
- Que no obstante la existencia de ésta las normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso concreto, por falta total o parcial de la reglamentación necesaria.
- Que las disposiciones con las que vaya a colmarse la deficiencia contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.

COMISION
EN MATERIA DE
CREDITO

Del artículo 1063 transcrito en líneas anteriores, se advierte que el legislador circunscribió que en los juicios mercantiles se rigen de acuerdo al Código de Comercio y a las leyes especiales en materia de comercio, en este caso la Ley de Instituciones de Crédito, se considera que se trata de una ley especial, igualmente aplicable al procedimiento ejecutivo



mercantil, máxime que la ley reputa como actos de comercio, las operaciones realizadas por los bancos, siendo la naturaleza jurídica de mi representada, precisamente la de una institución de crédito.

Para mayor precisión, resulta conveniente citar los siguientes preceptos jurídicos contenidos en el Código de Comercio, los cuales la autoridad de amparo no tomó en consideración al momento de dictar el acto reclamado, vulnerando la esfera jurídica de mi representada, al haberse dictado una sentencia contraria a la letra de la ley aplicable al caso concreto.

Desde este momento, cabe destacar a este órgano revisor de amparo resulta ilegal la resolución que se impugna en el presente recurso, ya que fue dictada por el juzgador de amparo en contravención a los principios de legalidad, estricto derecho, debido proceso, certeza jurídica y exhaustividad, sirven de apoyo las siguientes:

'EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.⁶

El artículo 17 constitucional consigna los principios rectores de la impartición de justicia, para hacer efectivo el derecho a la jurisdicción. Uno de estos principios es el de la completitud, que impone al juzgador la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos. Para cumplir cabalmente con la completitud exigida por la Constitución, se impone a los tribunales la obligación de examinar con exhaustividad todas las cuestiones atinentes al proceso puesto en su conocimiento, y esto

⁶ Décima Época. Registro: 2005968. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: I.4o.C.2 K (10a.). Página: 1772.

se refleja en un examen acucioso, detenido, profundo, al que no escape nada de lo que pueda ser significativo para encontrar la verdad sobre los hechos controvertidos, o de las posibilidades que ofrezca cada medio probatorio. El vocablo exhaustivo es un adjetivo para expresar algo que se agota o apura por completo. El vocablo agotar hace referencia a llevar una acción de la manera más completa y total, sin dejarla inconclusa ni en la más mínima parte o expresión como lo ilustra el Diccionario de la Lengua Española: *"Extraer todo el líquido que hay en una capacidad cualquiera; gastar del todo, consumir, agotar el caudal de las provisiones, el ingenio, la paciencia, agotarse una edición; cansar extremadamente"*. Sobre el verbo apurar, el diccionario expone, entre otros, los siguientes conceptos: *"Averiguar o desentrañar la verdad ahincadamente o exponerla sin omisión; extremar, llevar hasta el cabo; acabar, agotar; purificar o reducir algo al estado de pureza separando lo impuro o extraño; examinar atentamente"*. La correlación de los significados destacados, con miras a su aplicación al documento en que se asienta una decisión judicial, guía hacia una exigencia cualitativa, consistente en que el juzgador no sólo se ocupe de cada cuestión planteada en el litigio, de una manera o forma cualquiera, sino que lo haga a profundidad, explore y enfrente todas las cuestiones atinentes a cada tópico, despeje cualquier incógnita que pueda generar inconsistencias en su discurso, enfrente las diversas posibilidades advertibles de cada punto de los temas sujetos a decisión, exponga todas las razones que tenga en la asunción de un criterio, sin reservarse ninguna, y en general, que diga todo lo que le sirvió para adoptar una interpretación jurídica, integrar una ley, valorar el material probatorio, acoger o desestimar un argumento de las partes o una consideración de las autoridades que se ocuparon antes del asunto, esto último cuando la sentencia recaiga a un medio impugnativo de cualquier naturaleza. El principio de exhaustividad se orienta, pues, a que las consideraciones de estudio de la sentencia se revistan de la más alta calidad posible, de completitud y de consistencia argumentativa.

'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO EL QUEJOSO ARGUMENTE INOBSERVANCIA A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN EL AMPARO DIRECTO, BASTA QUE EN AQUÉLLOS MENCIONE CUÁLES FUERON LAS CONSIDERACIONES



OMITIDAS.⁷ Con base en el principio procesal relativo a que las partes exponen los hechos y el juzgador aplica el derecho, cuando el quejoso argumente inobservancia a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia impugnada en el amparo directo, basta que en los conceptos de violación mencione cuáles fueron las consideraciones omitidas, es decir, es suficiente con que contengan la expresión clara de la causa de pedir, en aras de no obstaculizar el acceso efectivo a la jurisdicción previsto en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, no deben exigirse mayores requisitos, como sería precisar qué parte específicamente de los agravios hechos valer dejó de atenderse; como es que en el proceso afecta dicha omisión e incluso, que deban expresarse silogismos lógico-jurídicos a fin de evidenciar la transgresión a la esfera de derechos del promovente, pues de hacerlo se constituiría una carga procesal excesiva en perjuicio de éste.

Es de hacer hincapié a este órgano revisor, que el Juez Noveno de Distrito de esta ciudad omite entrar al estudio del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente, de aplicación supletoria a la legislación mercantil, ya que dicho precepto establece:

'Artículo 86. Mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos.'

Del estudio del precepto transcrito, se consideran a los integrantes del Sistema Bancario Mexicano como de acreditada solvencia y éstos no están obligados a constituir depósitos o fianzas legales; y toda vez que mi poderdante forma parte del Sistema Bancario Mexicano, ésta queda exenta de la garantía

⁷ Novena Época, Registro: 164826, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materia(s): Común, Tesis: III.Io.T.Aux.I K, Página: 2714.

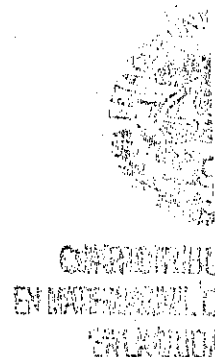
impuesta por la autoridad responsable.

Al respecto, se considera que al acto reclamado le resulta aplicable supletoriamente lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues se cumplen los requisitos enunciados en el párrafo precedente, ya que el artículo 1063 del Código de Comercio, prevé la aplicación supletoria en primer término, de las leyes especiales en materia de comercio, como lo es la Ley de Instituciones de Crédito; en segundo término, el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como del cuerpo adjetivo de la entidad en que se tramita el juicio en el caso, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en ese orden.

El segundo de los requisitos en cuestión, relativo a que la ley a suplirse contenga la institución jurídica de que se trata, su señoría deberá considerarla reunida, toda vez que el ordenamiento de la materia prevé de manera el género de la institución jurídica en estudio, esto es, la acreditada solvencia de mi representada por formar parte del Sistema Bancario Mexicano y, por no encontrarse en quiebra o liquidación.

En cuanto al tercero de los elementos en estudio, referente a que, no obstante la existencia de la regulación de la figura las normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso en concreto, por falta total o parcial de la reglamentación necesaria, igualmente debe considerarse acreditado, ya que en el Código de Comercio no se establece con claridad que las instituciones bancarias con acreditada solvencia quedan exentas de la constitución de garantías por daños y perjuicios a terceros.

Finalmente, en cuanto al último de los requisitos, consistente en que las disposiciones con las que vaya a colmarse





la deficiencia contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida, se considera que se encuentra plenamente acreditado, debido a que la Ley de Instituciones de Crédito aplica su supletoriedad de manera directa sin que se contraríen las disposiciones legales para ello.

A mayor abundamiento, es menester resaltar que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia precitada, nuestro máximo tribunal puntualizó que aun en ausencia de regulación de una institución procesal, acorde a lo dispuesto por el artículo 14 de nuestra Carta Magna, los juzgadores están autorizados para acudir a los "principios generales del derecho" para resolver toda clase de controversias del orden civil y el numeral 17 del mismo ordenamiento legal prevé el derecho que toda persona tiene para que se le administre justicia por tribunales y que esta sea pronta y expedita.

Por tanto, queda claro que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito cobra relevancia ya que el legislador indicó que mi representada al ser integrante del sistema Financiero Mexicano y al no estar en quiebra o liquidación, ésta queda exenta de constituir o se le imponga constituir fianza y/o garantías legales.

En ese orden de ideas, lo que precede revela que la autoridad responsable ordenadora manifiesta en su fallo de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, es contrario a ley y a los principios de legalidad y estricto derecho ya que como quedó ilustrado, el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito si es de aplicación supletoria a los juicios mercantiles y a las providencias precautorias, y no como erróneamente consideró la autoridad de amparo, empero la autoridad ordenadora violenta los derechos humanos de mi mandante al fijar una garantía y/o fianza y ordenar que se exhibieran los montos correspondientes

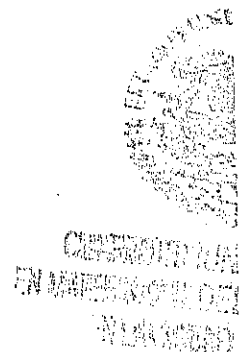
mediante fianza o billete de depósito, sin tomar en consideración el multicitado artículo de la ley supletoria, motivo por el cual, el órgano revisor de amparo deberá otorgar la protección constitucional a mi representada.

‘PRINCIPIO DE ERICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL.’⁸

En los juicios mercantiles opera con mayor rigor el principio dispositivo de estricto derecho que en las controversias de carácter meramente civil, lo que significa que a los contendientes, ante una actitud u omisión del órgano jurisdiccional que les perjudique, les compete actuar, promover y gestionar con más atención y cuidado, en el momento procesal oportuno, que sus pruebas sean admitidas y desahogadas, buscando con ello, que sus peticiones se satisfagan para inclinar el ánimo del juzgador y así lograr posiciones favorables ante la parte contraria.

‘JUICIO DE AMPARO. ES UN MEDIO PARA EL CONTROL DE LA LEGALIDAD, CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD.’⁹

Conforme a los artículos 10., 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación de 10 y 6 de junio de 2011, respectivamente, el juicio de amparo es un medio de control que sirve para que los órganos competentes verifiquen el respeto que las autoridades del Estado deben a las normas generales ordinarias que regulan su actuación (control de legalidad), a la Ley Fundamental (control de constitucionalidad) y a los tratados o convenciones internacionales (control de convencionalidad). Esto es, el juicio protector de los derechos fundamentales de los gobernados, conocido como juicio de amparo, tiene como parámetro de control esos tres tipos de normas jurídicas, y su objeto (de control) son los actos de autoridad -lato sensu-. Tal medio de defensa debe tramitarse y resolverse conforme a lo que establecen los referidos artículos 103 y 107 constitucionales (y su ley reglamentaria), favoreciendo, desde luego, los principios



⁸ Novena Época, Registro: 174859, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tómo XXIII, Junio de 2006, Materia(s): Civil, Tesis: I.6o.C. J/50, Página: 1045.

⁹ Décima Época, Registro: 2003615, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: I.5o.C. J/1 (10a.), Página: 1305.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

interpretativos de los derechos humanos contenidos en el propio artículo 1o. constitucional. De esta manera, todos los órganos del Estado Mexicano, en el ámbito de sus competencias, al resolver los problemas en los que se involucren los derechos humanos, deben atender, en principio, a los que consagra la Carta Magna, como también a los contenidos en los tratados o convenciones internacionales suscritos en esa materia y, desde luego, al cumplimiento del control de legalidad que no debe apartarse de los principios precisados.

Por otro lado, es menester mencionar a esta autoridad federal que aun y cuando el artículo 1175 del Código de Comercio establezca la fijación de una garantía por daños y perjuicios, debe entenderse que mi representada no se encuentra obligada a exhibirla; es decir, aun y cuando se fije una cantidad cierta como garantía por daños y perjuicios que se pudiesen ocasionar, también de cierto el acto reclamado carece de debida fundamentación y motivación pues por la acreditada solvencia que la ley dota a mi mandante, es de explorado derecho que mi representada no se encuentra obligada a exhibir garantía alguna.

En otras palabras, es ilegal que el juez responsable y el a quo argumenten se exhiba de manera obligatoria una garantía cuando el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito dota de acreditada solvencia a mi representada, por lo tanto, se debe entender que los integrantes del sistema bancario mexicano estamos exentos de su exhibición, aun y cuando se fije una garantía.

Desde este momento, cabe destacar a este órgano de control constitucional que resulta claramente ilegal el acto reclamado ya que el mismo fue dictado en contravención a los principios de debida fundamentación y motivación, violando de manera directa el principio de exhaustividad con el cual deben ser dictados todos los fallos de las autoridades jurisdiccionales, pues el juez responsable pretende fijar una fianza de exhibición

obligatoria, por lo que desde este momento se invoca la siguiente jurisprudencia que a la letra dice:

'VIOLACIONES PROCESALES. ESTÁN SUBORDINADAS AL ESTUDIO DE FONDO CUANDO ÉSTE REDUNDA EN MAYOR BENEFICIO PARA EL QUEJOSO, AUN CUANDO SEAN ADVERTIDAS EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE O SE HAGAN VALER VÍA CONCEPTOS DE VIOLACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 189 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).¹⁰ Del referido precepto deriva que el órgano jurisdiccional federal, por regla general, estudiará los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en mayor beneficio para el quejoso. Además, que en todas las materias se privilegiará el análisis de los de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir ese orden redunde el efecto destacado. De conformidad con lo apuntado, se colige que si la quejosa formula conceptos de violación encaminados a denunciar, tanto violaciones procesales, como de fondo, o bien, en los casos en que procede la suplencia de la queja el tribunal de amparo advierte la existencia de aquellas que pudiesen ameritar la concesión de la protección constitucional para reponer el procedimiento y, paralelamente, se observa que la quejosa obtendrá un mayor beneficio en un aspecto de fondo; entonces, el estudio de las violaciones procesales en ambos supuestos, ya sea que se hagan valer vía conceptos de violación o se adviertan en suplencia de la queja deficiente, debe subordinarse al de fondo del asunto en tanto en esta temática subyace el mayor beneficio a que alude el numeral citado.'

QUINTO
Tribunal
3-1-2019

Como lo establece el anterior criterio jurisprudencial, las autoridades de amparo tienen la facultad de estudiar de oficio, inclusive en suplencia de la queja deficiente las violaciones procesales y de derechos humanos señaladas en el acto reclamado, por lo que de esta manera se deja expuesta la ilegalidad con la que fue dictado el acto reclamado por parte del

¹⁰ Décima Época, Registro: 2006757, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: (IV Región) 1o. J/7 (10a.), Página: 1488.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

juez responsable pues es de explorado derecho que debe aplicarse al pie de la letra lo impuesto por la ley.

Ahora bien, se considera importante hacer notar que las simples violaciones al procedimiento y a los derechos humanos tendrán lugar a la concesión del amparo, ya que como bien se señala en el presente escrito se señala al a quo la violación al acceso a la justicia y tutela judicial efectiva en la que incurrió al no dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Por lo anterior deberá concederse el amparo y protección de la Justicia Federal a mi representada con la finalidad de que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y en su lugar emita una nueva sentencia donde declare fundado el recurso de revocación y decrete de plano la admisión de las providencias precautorias que le fueron solicitadas sin fijar fianza alguna y/o fijándola sin solicitar la exhibición de la garantía.

DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN.¹¹ De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de

¹¹ Décima Época, Registro: 2012051, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a. CXCIV/2016 (10a.), página: 317.

las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios.

En conclusión resulta infundada e improcedente la negación del amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, por lo que, este alto tribunal deberá ordenar la revocación de la sentencia impugnada y en su lugar pronunciar otra, con lo fundado de los agravios que se esgriman en el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

presente recurso, para que posteriormente otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso en el principal, tomando en consideración lo que establece la ley que beneficia a mi representada; para que a su vez, la autoridad responsable de cumplimiento a la sentencia que este tribunal revisor emita, con la finalidad de que se restituya de esta manera a mi representada el goce de los derechos humanos y garantías constitucionales que le han sido violadas."

CUARTO. Estudio de los agravios

Como se observa en los considerandos segundo y tercero, la quejosa planteó en la litis de amparo, que para la procedencia de las medidas precautorias que solicitó en el procedimiento de origen no debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, que prevé que debe garantizarse la reparación de los daños y perjuicios que tales medidas puedan ocasionar al deudor; sino que debe observarse el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, que dispone que las instituciones bancarias que no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, no estarán obligadas a constituir depósitos o fianzas legales.

En los agravios de la revisión se pretende impugnar y desvirtuar la desestimación de los conceptos de violación realizada en la sentencia recurrida.

Los conceptos de agravio son **infundados** en una parte e **inoperantes** en otra, y se examinarán conforme a la temática siguiente.

4.1. Supletoriedad del Código de Comercio

Son **inoperantes** los motivos de agravio en los que se alega, que en la sentencia recurrida se omitió realizar el estudio

de la aplicación supletoria del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, al Código de Comercio.

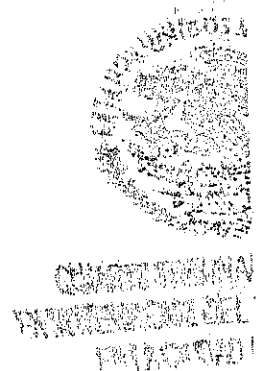
Es verdad que la juez federal no realizó tal examen, pero esto se debió a que el tema de la supletoriedad referida no fue planteado en los conceptos de violación de la demanda de amparo indirecto.

En efecto, en único concepto de violación la entonces quejosa alegó que: i) el acto reclamado carecía de fundamentación y motivación; ii) la autoridad responsable no advirtió la diferencia entre fijar una garantía y requerir la exhibición de la fianza a una institución de crédito, y iii) con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1054, 1277 y 1278 del Código de Comercio, se derivaba la presunción legal contenida en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, consistente en que los integrantes del sistema bancario mexicano no están obligados a constituir depósitos o fianzas legales en los juicios que sean parte.

Es de destacarse, que en la demanda de amparo la quejosa alegó expresamente, que en el caso, la Ley de Instituciones de Crédito no era aplicable de manera supletoria, sino que era aplicable de manera directa.

Lo anterior se advierte en la siguiente transcripción del siguiente párrafo del capítulo de conceptos de violación:

"De una interpretación armónica de los preceptos antes transcritos se concluye que se consideran a los integrantes del Sistema Bancario Mexicano de acreditada solvencia y éstos, y (sic) no están obligados a constituir depósitos o fianzas legales en los juicios en que sean parte aclarando que esto no significa que estén exentos de responder en (sic) por ellos en caso de que se ocasionen, esto constituye una presunción legal establecida en disposición expresa,





*misma que en la resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, contraviene lo establecido por el legislador, y donde el legislador no distinguió, la autoridad no debe hacerlo, ello por encontrarse contemplado de esta forma en la Ley de Instituciones de Crédito, la cual es una ley general, **aplicable al caso en particular no de forma supletoria al Código de Comercio, sino aplicable** ya que en los numerales correspondientes a la presunción legal, no señala que sólo se reconocerá la que se contemple en determinadas legislaciones."*

La cita del artículo 1054 del Código de Comercio y la expresión resaltada en negritas del párrafo transcrito, son las únicas referencias que se realizan sobre el tema de supletoriedad en los conceptos de violación, los cuales se enfocaron en mayor medida en tratar de poner de manifiesto que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito constituía una presunción legal que debía tenerse por actualizada en el caso concreto, para que la juez natural considerara que el banco quejoso estaba eximido de presentar la garantía que le había sido requerida y confirmada por dicha juzgadora.

Por consiguiente, si en la demanda de amparo indirecto se expresó que **no** se surtía la aplicación supletoria del artículo, la sentencia recurrida no tenía por qué ocuparse de ese punto de manera afirmativa, pues de hacerlo así, el fallo habría sido incongruente si le daba un tratamiento de manera opuesta a la que fue planteado.

A mayor abundamiento, aun en la hipótesis de que la intención de la quejosa sí hubiese sido la de aducir la aplicación supletoria del artículo 86 citado, lo cierto es que esa alegación debiera desestimarse, pues no es factible realizar tal ejercicio.

En efecto, este tribunal colegiado ha sustentado el

criterio jurisprudencial¹², en el que se sostiene, que los requisitos necesarios para que exista la supletoriedad de unas normas respecto de otras, son: **a)** que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale la ley supletoria; **b)** que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; **c)** que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y **d)** que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.

Los requisitos que anteceden son coincidentes con los de la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.) que cita la recurrente, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro **"SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE"**.¹³

Ninguno de los requisitos se actualiza en el caso de supletoriedad que se propone en los agravios.

Lo anterior es así, porque:

a) En relación con el elemento señalado en el inciso **a)**, el artículo que prevé la supletoriedad del Código de Comercio es el 1054; no así el artículo 1063, como lo alega la recurrente.¹⁴

¹² Jurisprudencia 14o.C. J/58 de rubro: **"SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE"**. Registro 212754. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, abril de 1994, página 33.

¹³ Registro: 2003161. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1065.

¹⁴ **"Artículo 1054.** En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva."



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Por tanto, al no haber una mención expresa en el sentido de que la Ley de Instituciones de Crédito sea supletoria del Código de Comercio, o el artículo 86 en particular, los ordenamientos suplentes, en su caso, serían el Código Federal de Procedimientos Civiles en primer término (el cual también contiene una norma similar sobre el otorgamiento de la garantía¹⁵) o en su defecto, el código adjetivo civil local.

Los restantes elementos b), c) y d) tampoco se actualizan, por la razón esencial de que el planteamiento que la quejosa realiza en el juicio de garantías constituye una postura opuesta a la aplicación del artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio que prevé, que cuando se solicite la medida precautoria de retención de bienes de una persona, se debe cumplir con el requisito de garantizar los daños y perjuicios que la medida pudiera ocasionar al deudor, sin hacer distinción alguna.

Es decir, la pretensión final de la quejosa es de que la autoridad responsable la exima de otorgar la garantía a que se refiere el precepto citado, para lo cual, aduce que se debe observar el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, que dispone que las instituciones de crédito, que no estén en liquidación o procedimiento de quiebra, no estarán obligadas a constituir depósitos o fianzas legales.

Lo anterior explica que en la sentencia recurrida, la juez de distrito haya advertido un conflicto de normas, que atendió con apoyo en las reglas para resolver antinomias (lo cual no es desvirtuado con los agravios de la revisión, como se verá en el

"Artículo 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local."

¹⁵ *"Artículo 391. La parte que solicite la medida debe previamente otorgar garantía suficiente para responder de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen, y la parte contra la que se dicte podrá obtener el levantamiento de la medida, o que no se efectúe, otorgando contragarantía suficiente para responder de los resultados del juicio."*

apartado siguiente).

Pero lo que queda de manifiesto que:

i). El artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio prevé de manera general, sin excepciones, que quien solicite las medidas precautorias deberá exhibir la garantía citada.

ii). No se advierte que adolezca de falta de regulación o que ésta sea insuficiente para su aplicación, en cuanto a las personas obligadas a exhibir la garantía para la procedencia de las medidas precautorias

iii). La disposición legal que la quejosa pide que se aplique de manera supletoria se opone a la generalidad dispuesta en el precepto del Código de Comercio, en cuanto a que prevé que las instituciones de crédito están exceptuadas de la exhibición de garantías en los procesos judiciales.

Por consiguiente, aunque se considerara que la impetrante sí quiso plantear el tema de la supletoriedad del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, aun en esa hipótesis, los motivos que plantea en los conceptos de agravio resultarían **infundados** por las razones apuntadas.

4.2. Aplicación del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito

En los restantes conceptos de agravio la recurrente expresa que, en términos del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, dicha institución de crédito está exceptuada de exhibir garantía para la procedencia de las medidas precautorias solicitadas, y que en la sentencia recurrida se debió haber resuelto en ese sentido para otorgarle la protección constitucional solicitada.



Los motivos de inconformidad son **inoperantes**, al no controvertir ni desvirtuar las consideraciones de la sentencia recurrida.

En dicho fallo se consideró que:

1. La Ley de Instituciones de Crédito fue creada para regular el Sistema Bancario en México, lo cual es independiente de las normas procesales que rigen los juicios y procedimientos mercantiles en los que un banco sea parte.
2. El artículo 86 de la ley citada no es aplicable, porque no está inmersa en la ley especial que regula los procedimientos mercantiles que es el Código de Comercio; por lo que no se puede aplicar al no pertenecer al sistema normativo que regula la procedencia y requisitos para el otorgamiento de las providencias precautorias.
3. Las normas especiales (en el caso, el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio) excluyen la aplicación de las normas generales, como lo es el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito; por lo que se debe estar a lo que dispongan las normas procesales.
4. Existe una colisión de normas entre lo establecido en una norma general (Ley de Instituciones de Crédito) y una norma especial que regula el tema de las providencias precautorias solicitadas (Código de Comercio) que no guardan una relación jerárquica entre sí; por lo que era observable la ley especial que regula las medidas precautorias sin hacer excepción alguna.
5. También citó un criterio de razonabilidad, dado que la medida precautoria solicitada antes de juicio podría afectar el patrimonio de la persona a la que se les va a decretar, ya que se les secuestran bienes sin previa audiencia, por lo que es

necesario que se rija por las disposiciones que permiten la reparabilidad integral de afectación que pudiera conllevar el otorgamiento de tales providencias precautorias.

Para apoyar lo atinente el criterio de especialidad, la juez federal citó, entre otras, la tesis I.4o.C.220 C de este tribunal colegiado de rubro **"ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. CRITERIOS DE SOLUCIÓN"**.¹⁶

Respecto a esas consideraciones que constituyen la base de la decisión de la sentencia recurrida, la recurrente se limita a sostener que debe aplicarse el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, y tilda de ilegal que no se considere así.

Con tales alegaciones se omite controvertir y desvirtuar las consideraciones de la sentencia, pues como se ha visto, la juez federal dijo advertir un conflicto entre leyes y lo resolvió con apoyo en los criterios de especialidad y de razonabilidad descritos.

En todo caso, correspondía a la recurrente alegar y desvirtuar lo atinente a la existencia de ese conflicto de leyes y las bases de su solución; es decir, debía alegarse respecto de la forma en que la juez de distrito descartó la aplicabilidad del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito al considerarla una ley general, y que prevaleciera lo dispuesto en el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, por considerarla la ley especial y por la razonabilidad de su contenido.

Sin embargo esto no es así, sino que la quejosa recurrente se limita a afirmar la aplicabilidad del citado artículo 86 y la procedencia de la exceptuación que prevé para la exhibición de garantías por parte de las instituciones de crédito.

¹⁶ Registro: 165344, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Febrero de 2010, página 2788.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Lo anterior aunado a los agravios sobre la aplicación supletoria del artículo 86, lo cual ha quedado desestimado en el apartado que antecede.

Por ende, al no controvertirse de manera frontal las consideraciones de la sentencia reclamada, sobre el conflicto de normas y su solución, tales consideraciones se mantienen incólumes para seguir rigiendo el sentido de la sentencia impugnada; lo cual da lugar a declarar su confirmación.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 a 93 de la Ley de Amparo, 35 y 37 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO. Se **confirma** la sentencia recurrida que negó la protección constitucional solicitada en el juicio de amparo indirecto 401/2019-V.

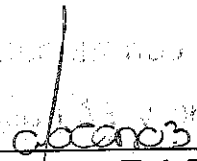
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de distrito que los remitió y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados Mauro Miguel Reyes Zapata, como presidente, Leonel Castillo González y Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo. Firman la sentencia todos los nombrados, ante el secretario de acuerdos, quien da fe.


MAGISTRADO PRESIDENTE
MAURO MIGUEL REYES ZAPATA


MAGISTRADO
LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ


MAGISTRADA
ETHEL LIZETTE DEL CARMEN
RODRÍGUEZ ARCOVEDO


SECRETARIO DE ACUERDOS
ARMANDO LOZANO ENCISO

RILM/r.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA PARTE FINAL DE LA SENTENCIA
DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN RC-214/2019, INTERPUESTO

EN EL FALLO SE RESOLVIÓ: CONFIRMAR LA
RESOLUCIÓN RECURRIDA QUE NEGÓ LA PROTECCIÓN
CONSTITUCIONAL.

ESTA SENTENCIA SE TERMINÓ DE ENGROSAR Y FUE FIRMADA EL
22 AGO 2019. CONSTE.

EN 26 AGO 2019 EL SECRETARIO DE ACUERDOS
HACE CONSTAR: QUE EN ESTA FECHA SE RECIBIÓ EN LA
SECRETARÍA EL PRESENTE EXPEDIENTE POR PARTE DE LA
PONENCIA. CONSTE.

ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA
CENTRAL
COURT OF
INTER-AMERICAN
JUDICIAL
RELATIONS



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

045

EXPEDIENTE: nc-21a6019

A las nueve horas del 27 AGO 2019
con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de
Amparo, notifico por medio de lista a las partes, la resolución
de 21 AGO 2019 la cual se fija en los estrados de este
tribunal y a través de la página electrónica del Consejo de la
Judicatura Federal, con la siguiente dirección:
www.cjf.gob.mx. Lo anterior, con excepción de la
autoridad(es) responsable(s) y aquella que se haya ordenado
de manera distinta. Doy fe.

SECRETARÍA DE JUSTICIA
FEDERAL
COLEGIO
DEL PRIMER CÍRCULO
DE MÉXICO

EL (LA) ACTUARIO (A)

LIC. TERESA

HERNÁNDEZ GARCÍA

ACTUARIA

146

230

800 1102 52
ORIGINAL
EX-110

CUARTO TRIB.
MATERIA CIVIL
ENTRADA

1911



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

017

AMPARO EN REVISIÓN: RC-308/2019.**RECURRENTES:** [REDACTED]

(QUEJOSOS)

PONENTE: MAGDO. MAURO MIGUEL REYES ZAPATA.
SECRETARIA: LIC. MARHÉC DELGADO PADILLA.

Ciudad de México, siete de noviembre de dos mil diecinueve.

V I S T O S para resolver los autos del toca RC-308/2019, relativo al recurso de revisión interpuesto por [REDACTED]

por conducto de su apoderado [REDACTED]
[REDACTED] contra la sentencia de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, engrosada el diecisiete de septiembre siguiente dictada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 299/2019, que concedió la protección constitucional, y

RESULTANDO:**PRIMERO. Juicio de amparo indirecto.**

I. Presentación de la demanda de amparo. El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, [REDACTED]

[REDACTED]

conducto de su apoderado [REDACTED]
solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra
de los actos y autoridades siguientes:

- De la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México:

La resolución de cinco de marzo de dos mil diecinueve,
dictada en el toca 159/2018/1, en donde, se modificó el auto de
veintidós de enero de dos mil dieciocho emitido en el juicio
ordinario mercantil radicado en el expediente 1217/2017. Lo
anterior, en cumplimiento al fallo protector dictado por este órgano
jurisdiccional el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve en el
tocca RC-264/2018.

QUARTO TRIBUNAL
EN MATERIA CIVIL DEL
EN LA CIUDAD

- Del Juzgado Quincuagésimo Séptimo de lo Civil del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la ejecución
de la referida resolución.

Dichos actos se estimaron violatorios de los artículos 1º,
14 y 16 constitucionales.

**II. Admisión de la demanda de amparo y audiencia
constitucional.** En cumplimiento a la ejecutoria dictada por este
tribunal el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve en el recurso
de queja Q.C.135/2019, mediante proveído de cuatro de junio
siguiente, el juez de distrito admitió la demanda de amparo y la
registró con el número 299/2019-IV; dio intervención al Agente del
Ministerio Público de la Federación adscrito; requirió a las
autoridades responsables sus informes justificados. Finalmente,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

018

señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

Ésta tuvo lugar el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, mediante la cual se dictó sentencia que concedió la protección constitucional, engrosada el diecisiete de septiembre siguiente.

La notificación de esta resolución surtió efectos para el quejoso el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve.

SEGUNDO. Recurso de revisión. El dos de octubre de dos mil diecinueve, las quejasas [REDACTED] interpusieron recurso de revisión dentro del plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo. El conocimiento del recurso correspondió a este Cuarto Tribunal Colegiado, donde se admitió por auto de presidencia de nueve de octubre siguiente. El Agente del Ministerio Público de la Federación no formuló pedimento. El veintiuno posterior, el asunto se turnó al Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, para la elaboración del proyecto de resolución.

COLEGIADO
PRIMER CIRCUITO
DE MÉXICO

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este tribunal es competente para conocer del presente negocio, en conformidad con los artículos 37, fracción II, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de

Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente desde el veintitrés de enero de dos mil trece, por tratarse de recurso de revisión interpuesto contra la resolución que concedió la protección constitucional, por juez de distrito de este circuito.

SEGUNDO. Resolución impugnada.

“Cuarto. Improcedencia. En el caso concreto, al no advertirse de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia, ni hacerla valer las partes, se analizan los conceptos de violación, que se tienen por reproducidos en obvio de repetición innecesaria, al resultar aplicable la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro:

**“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.
PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS
SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU
TRANSCRIPCIÓN.”**

Se procede al examen de los conceptos de violación expuestos en la demanda, de los que se desprenden, en esencia, los planteamientos siguientes:

a) Ahora bien, respecto a lo señalado por los hoy quejosos en el sentido de que la resolución que señala como acto reclamado es ilegal e inconstitucionalidad debido a que impone a las ahora quejosas la exhibición de una garantía en billete de depósito por la cantidad equivalente a la tasa anual de 37% sobre la suerte principal, sin permitir que dicha garantía pueda otorgarse por cualquiera de los medios establecidos en la ley, ya sea fianza,

CUARTO TRIBUNAL
EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER JUZGADO



hipoteca, prenda, u otros, transgrediendo con ello el principio de legalidad y exacta aplicación de la ley consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la sala responsable inaplica el contenido del artículo 1189 del Código de Comercio, que permite a los solicitantes de una providencias precautorias de las previstas en dicho ordenamiento, garantizar mediante el otorgamiento de cualquier tipo de garantía, los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse con la ejecución de las medidas cautelares.

b) Asimismo señala que el criterio con el cual la sala responsable pretende justificar el monto de la garantía impuesta a las quejas no es aplicable en la especie, ya que este se refiere exclusivamente al porcentaje límite al que pueden ascender los intereses moratorios convencionales, pactados en contratos mercantiles cuyo pago o cumplimiento puede exigirse en el estado de Aguascalientes.

c) Por otra parte señala que la resolución que señala como acto reclamado es ilegal e inconstitucional debido a que impone a las quejas la exhibición de una garantía en billete de depósito por la cantidad equivalente a la tasa anual de 37% sobre la suerte principal, sin permitir que dicha garantía pueda otorgarse por cualquiera de los medios establecidos por la Ley, ya sea fianza, hipoteca, prenda, u otros transgrediendo con ello el principio de legalidad y exacta aplicación de la ley consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la sala responsable inaplica el contenido del artículo 1189 del Código de Comercio, que permite a los solicitantes de una providencia precautoria de las previstas en dicho ordenamiento, garantizar mediante el otorgamiento de cualquier tipo de garantía, los daños y perjuicios que pudiera ocasionar con la ejecución de las medidas cautelares.

COLEGIO
PRIMER CIRCUITO
DE MÉXICO

Para una mejor comprensión del tema, conviene precisar algunos antecedentes del juicio del cual deriva el acto reclamado, los que se advierten de las documentales remitidas por la sala y juez responsables al momento de rendir sus respectivos informes con justificación solicitados, y que han sido valoradas.

1. Mediante escrito presentado el doce de diciembre de dos mil diecisiete en la Oficialía de Partes Común Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, turnado el siguiente día hábil al Juzgado Quincuagésimo Séptimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el número de expediente 1217/2017, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] conducto de sus apoderados [REDACTED]

[REDACTED] demandó en la vía ordinaria mercantil de [REDACTED]

[REDACTED] las prestaciones contenidas en el propio escrito de demanda y solicitó providencias precautorias, previa prevención, mediante proveído dictado el veintidós de enero de dos mil dieciocho, se admitió la demanda y se proveyó respecto a las providencias precautorias y de aseguramiento que solicita, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que no prueba con documento suficiente la existencia de un crédito líquido y exigible a favor de la actora, es decir, no exhibe estado de cuenta certificado por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, por lo que no acredita lo que dispone el artículo 1175, fracción I, del Código de Comercio (fojas 34 a la 159 del Tomo I del cuaderno de constancias).

2. Inconforme con dicha determinación los actores hoy quejosos interpusieron recurso de apelación, el cual fue admitido





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA-A-55

7

RC-308/2019

mediante acuerdo de nueve de febrero de dos mil dieciocho (fojas 160 a la 185 del Tomo I del cuaderno de constancias).

020

3. Seguido el trámite del recurso de apelación, el siete de marzo de dos mil dieciocho, en los autos del toca número 159/18/1, se resolvió el recurso de apelación que hizo valer la parte actora en contra de la parte conducente del auto dictado el veintidós de enero de dos mil dieciocho por el Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, en el juicio ordinario mercantil promovido por [REDACTED]

[REDACTED] y otro, con número de expediente 1217/2017, en los siguientes términos:

PRIMERO.- Se declara fundado pero inoperante en una parte y en otra parte infundados, los agravios que hizo valer la parte actora, en contra de la parte conducente del auto dictado el veintidós de enero de dos mil diecinueve, por el Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, en el juicio ordinario mercantil, promovido por [REDACTED] y otro en contra de [REDACTED] con número de expediente 1217/2017; en consecuencia.

SEGUNDO.- Se confirma el auto recurrido.

TERCERO.- No se hace especial condena en costas en la presente instancia.

CUARTO.- Remítase al A quo copia autorizada de esta resolución y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.

QUINTO.- Notifíquese...

(Fojas 38 a la 47 del Tomo II de las actuaciones del toca 159/18/1).

4. Inconforme con dicha resolución la parte actora hoy quejosa, promovió juicio de amparo indirecto, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Quinto de Distrito en



EL COLEGIADO
PRIMER CIRCUITO
DE MÉXICO

Materia Civil en la Ciudad de México, asignándole el número de expediente 373/2018-III, y por resolución de doce de julio de dos mil dieciocho determinó no amparar ni proteger a los quejosos, aquí inconformes.

5. En contra de la anterior resolución, la parte actora promovió recurso de revisión, del cual correspondió conocer el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con el número de expediente RC-264/2018, quien por sentencia de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, ordenando dejar insubsistente la sentencia materia del juicio de garantías y dictar una nueva siguiendo los lineamientos trazados en dicha ejecutoria.

6. En acatamiento a la ejecutoria de cumplimiento emitida por el tribunal colegiado, el cinco de marzo de dos mil diecinueve, la sala responsable dictó la resolución que ahora constituye el acto reclamado en los autos del toca 159/18/1, para resolver el recurso de apelación que hizo valer la actora en contra de la parte conducente del auto dictado el veintidós de enero de dos mil dieciocho por el Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, en el juicio ordinario mercantil promovido por [REDACTED] y otro en contra de [REDACTED] con número de expediente 1217/2017, en los siguientes términos:

PRIMERO.- Se declara insubsistente la anterior resolución.

SEGUNDO.- Se declaran parcialmente fundados los agravios que hizo valer la parte actora, en contra de la parte conducente del auto dictado el veintidós de enero de dos mil dieciocho, por el Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil de la Ciudad de México, en el juicio ordinario mercantil, promovido por [REDACTED]





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

[REDACTED] y otro en contra de [REDACTED] con número de expediente 1217/2017; en consecuencia.

021

TERCERO.- Se modifica el auto recurrido para quedar en los términos ordenados en el considerando tercero romano de esta resolución.

CUARTO.- No se hace especial condena en costas en la presente instancia.

QUINTO.- Remítase copia certificada de la presente resolución a la autoridad de amparo dictado, para su conocimiento y efectos legales procedente.

SEXTO.- Remítase al a quo copia autorizada de esta resolución, y en su oportunidad archívese el toca como asunto concluido.

SEPTIMO.- Notifíquese...

(Fojas 49 a la 67 del Tomo II de las actuaciones del toca 159/18/1).



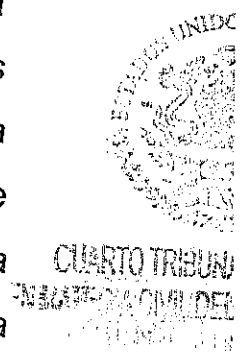
JUNTA COLEGIADA
DEL PRIMER CIRCUITO
MEXICO

La sentencia de cinco de marzo de dos mil diecinueve, constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo.

A fin de dar respuesta a los conceptos de violación expresados, es necesario resumir las consideraciones que sustentan el acto reclamado en la parte que interesa y que se encuentran en el considerando II, de esa sentencia.

Para decretar la modificación del auto impugnado, dicha autoridad ordenó las medidas precautorias solicitadas por la inconforme para el efecto de que se embargue a la empresa [REDACTED] en todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, efecto para lo cual, se requiere a la actora nombre depositario interventor con cargo a la caja, dentro del término de tres días apercibida que en caso de no hacerlo perderá su derecho, y una vez que éste acepte y proteste el cargo conferido, se le ponga en posesión del mismo por conducto del secretario actuario de este juzgado, así también se traba formal embargo sobre las cuentas bancarias y de valores que se

encuentran a nombre de los codemandados efecto para lo cual, gírese oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que por su conducto se requiera a las instituciones bancarias que menciona la actora para que informe sobre la existencia de cuentas a nombre de los codemandados, y en su caso la retengan hasta por la suma de un millón setecientos catorce mil trescientos noventa y dos pesos 04/100 moneda nacional, más un tanto igual de dicha cantidad para garantizar los accesorios legales reclamados, por las que se autoriza el embargo, al prudente arbitrio del juzgador por considerarlas suficientes para garantizar el pago de dichas prestaciones, y previo la exhibición de la garantía en billete de depósito por la cantidad de seiscientos treinta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos 05/100 moneda nacional, equivalente a la tasa anual del 37% sobre la cantidad de un noventa y dos pesos 04/100 moneda nacional, equivalente a la tasa anual del 37% sobre la cantidad total que se autoriza para embargo, que no se considera usuraria, conforme al criterio sostenido en la siguiente jurisprudencia: **‘INTERESES MORATORIOS. LA DECLARATORIA DE INCONVENCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 21, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, IMPLICA LIMITAR EL COBRO DE AQUELLOS, AL REDUCIRLOS HASTA EL TREINTA Y SIETE POR CIENTO ANUAL, Y NO LA ABSOLUCIÓN DE SU PAGO, NI FIJARLOS HASTA EL MONTO DEL INTERÉS LEGAL.’** En la tesis de rubro: **‘INTERÉS USURARIO. SE CONSIDERA A LA UTILIDAD POR MORA QUE EXCEDA DEL TREINTA Y SIETE POR CIENTO ANUAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.’**, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI,





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

022

Tomo 2, agosto de 2012, página 1734, este tribunal consideró que una ley más acorde que el Código Penal Federal para la protección del derecho humano reconocido en el artículo 21, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -que conmina a la prohibición en ley de la usura- es el artículo 48, fracción I, de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, que señala que ésta se da cuando un interés convencional evidente o encubierto excede de un treinta y siete por ciento anual; ahora bien, el pronunciamiento de la declaratoria de inconvencionalidad del artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito determina un límite para el cobro de intereses moratorios, cuyo efecto es que, en caso de que los réditos se excedan, el juez deberá reducirlos a ese porcentaje, sin que esto implique la absolución de su pago, o su reducción hasta el interés legal. Ello es así, porque si bien del artículo 77 del Código de Comercio se advierte que las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, no debe pasar inadvertido que la materia mercantil supone, per se, la existencia de una ganancia. En efecto, los préstamos en dinero llevan aparejado el pago de un dinero extra por concepto de intereses, lo que es lógico pues, de lo contrario, ningún prestamista se desprendería de un dinero que con riesgos recuperará en el futuro, sin poder disponer de él durante la vigencia del préstamo. Por tanto, partiendo de la premisa de que primigeniamente existe voluntad de las partes en el pacto de intereses; que se trata de la materia mercantil y que, atento al control de convencionalidad ejercido, se protege el derecho humano contenido en el numeral 3 del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al proscribir que en el cobro de intereses moratorios éstos no sean usurarios, se considera correcto que, para su reducción (en caso de que éstos se excedan del porcentaje que para el delito de usura prevé el artículo 48, fracción I, de la legislación penal para el Estado), se esté a lo dispuesto en el artículo 2266 de la codificación

L COLEGIO
PRIMER CIRCUITO

sustantiva civil local, que impone que el interés convencional no podrá exceder de treinta y siete por ciento anual y sanciona la transgresión a lo anterior de la manera siguiente: 'En caso de exceder la tasa del interés convencional, el juez de oficio, deberá disminuirla hasta establecerla dentro de los límites del presente artículo.' *PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. Amparo directo 193/2012. Pedro Rodríguez Cisneros. 12 de abril de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Silverio Rodríguez Carrillo. Secretaria: Adriana Vázquez Godínez. Nota: Por ejecutoria del 25 de junio de 2014, la Primera Sala declaró sin materia la contradicción de tesis 67/2013 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir las jurisprudencias 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.) que resuelven el mismo problema jurídico. Por ejecutoria del 24 de agosto de 2016, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 208/2015 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva. Época: Décima Época, Registro: 2001362. Instancia. Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Materia (s): Constitucional, Tesis XXX.1o.4 C (10a.). Página: 1737.*



Ahora bien, como se advierte de lo antes mencionado, se fijó a los aquí quejosos la cantidad de seiscientos treinta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos 05/100 moneda nacional, equivalente a la tasa anual del 37% sobre la cantidad de un noventa y dos pesos 04/100 moneda nacional, equivalente a la tasa anual del 37% sobre la cantidad total que se autoriza para embargo, que no se considera usuraria.

Asimismo, ordenando que se remitieran oficios a la

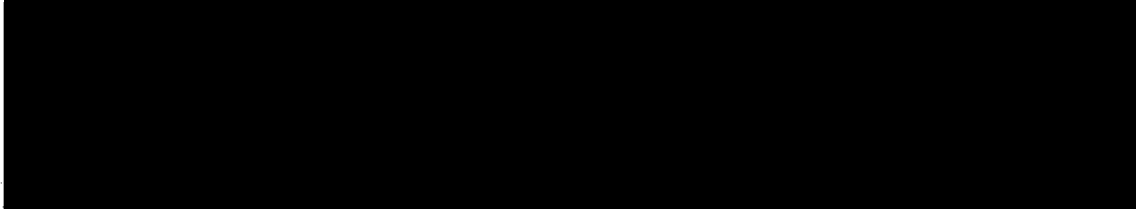


PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

023

Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que por su conducto se requiera a las Instituciones bancarias que menciona la actora para que informe sobre la existencia de cuentas a nombre de los codemandados, y en su caso la retengan hasta por la suma de un millón setecientos catorce mil trescientos noventa y dos pesos 04/100 moneda nacional, más un tanto igual de dicha cantidad para garantizar los accesorios legales reclamados.

Finalmente, con sustento entre otros, en los argumentos expuestos, pronunció la modificación al proveído impugnado, en que previo a decretar la medida precautoria solicitada, requirió a

JUNTA COLEGIADA
DEL PRIMER CIRCUITO

[REDACTED] la exhibición de la suma señalada con anterioridad, la que fijó con apoyo en conforme al criterio sostenido en la siguiente jurisprudencia: **INTERESES MORATORIOS. LA DECLARATORIA DE INCONVENCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 74 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 21, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, IMPLICA LIMITAR EL COBRO DE AQUELLOS, AL REDUCIRLOS HASTA EL TREINTA Y SIETE POR CIENTO ANUAL, Y NO LA ABSOLUCIÓN DE SU PAGO, NI FIJARLOS HASTA EL MONTO DEL INTERÉS LEGAL.** En la tesis de rubro: **INTERÉS USURARIO. SE CONSIDERA A LA UTILIDAD POR MORA QUE EXCEDA DEL TREINTA Y SIETE POR CIENTO ANUAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.**, para garantizar los posibles daños y perjuicios que con el otorgamiento de dicha providencia se pudieran causar a [REDACTED]

Por lo anterior, resultan fundados los conceptos de violación hechos por los quejosos en el sentido de que (sic).

Ahora bien, respecto a lo señalado por los hoy quejosos en el sentido de que la resolución que señala como acto reclamado es ilegal e inconstitucionalidad debido a que impone a las ahora quejosas la exhibición de una garantía en billete de depósito por la cantidad equivalente a la tasa anual de 37% sobre la suerte principal, sin permitir que dicha garantía pueda otorgarse por cualquiera de los medios establecidos en la ley, ya sea fianza, hipoteca, prenda, u otros, transgrediendo con ello el principio de legalidad y exacta aplicación de la ley consagrada en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la sala responsable inaplica el contenido del artículo 1189 del Código de Comercio, que permite a los solicitantes de una providencias precautorias de las previstas en dicho ordenamiento, garantizar mediante el otorgamiento de cualquier tipo de garantía, los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse con la ejecución de las medidas cautelares.



Lo anterior, es así, ya que al tratarse de un juicio ordinario mercantil, el Código que regula la materia del procedimiento de origen, esto es, el Código de Comercio.

En tal contexto, el Código de Comercio en los artículos 1171 y 1175 fracción V, establecen lo siguiente:

(Los transcribe).

Luego, de los preceptos plasmados, se desprende lo siguiente:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMAA-55

15

RC-308/2019

024

1. Si la solicitud de radicación de persona se formula previo a la presentación de la demanda, el promovente deberá garantizar el pago de los daños y perjuicios que se generen si no se presenta, así como que el monto de la garantía deberá ser determinado prudentemente por el juez, con apoyo en la información proporcionada y cuidado que sea asequible para el peticionario.

2. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pida entre otros requisitos, garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar al deudor, en el caso de no presentar la demanda o porque promovida, sea absuelta su contraparte, así como que el monto de la garantía deberá ser determinado prudentemente por el juez, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante.

AL COLEGIADO
1.º PRIMER CIRCUITO
DE MÉXICO

De lo señalado, en primer lugar se advierte que el numeral 1171, en que la responsable se apoyó para fijar la cantidad para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran causar a la presunta demandada, resulta aplicable tratándose de radicación de personas, no de retención de bienes, por lo que la aplicación de dicho precepto fue desacertada, sin embargo esa no es razón suficiente para conceder el amparo, puesto que en términos de la fracción V del artículo 1175, que se transcribió, se podrá ordenar la retención de bienes cuando el que lo solicite, entre otros requisitos, garantice los daños y perjuicios que se puedan ocasionar con la medida al deudor, suma que será determinada por el juez prudentemente, con base en la información proporcionada y cuidando que se asequible para el solicitante. Esto es, tal precepto también impone la fijación de una garantía para casos como el de la especie.

No obstante ello, como lo refieren los impetrantes, la cantidad que le fue señalada no resulta asequible, sino que además le ocasiona un menoscabo patrimonial.

La finalidad de la garantía que se fija a los promoventes, es asegurar el pago de los daños y perjuicios que se pudieran causar a su adversario con su otorgamiento, sea porque no se promoviera la demanda oportunamente, o bien, porque se absuelva a la demandada.

En ese tenor, los artículos 2108 y 2019 del Código Civil Federal, establecen lo siguiente:

(Los transcribe).

Se parte de la acepción legal que corresponde a los daños y perjuicios, se tiene que en las providencias precautorias se deben garantizar para el caso de que el promovente no presentara en tiempo la demanda o su contraria sea absuelta, y el monto de tal aseguramiento que como ya se ha dicho, su aseguramiento deberá ser determinado prudentemente por la autoridad responsable, con base en la información proporcionada y debiendo ser asequible para el solicitante.

Luego, si va a ser asegurada una cantidad de dinero del presunto demandado, se deberán garantizar los daños y perjuicio que con el otorgamiento de dicha medida se le pudieran causar.

Desde esa normada perspectiva, como lo aduce la impetrante, la cantidad de seiscientos treinta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos 05/100 moneda nacional, que le fue fijada, no se encuentra ajustada a derecho, toda vez que se





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

025

determinó discrecionalmente y no prudentemente, además de que fue por el treinta y siete por ciento de la cantidad por la que se solicitó el aseguramiento, ello es, un millón setecientos catorce mil trescientos noventa y dos pesos 04/100 moneda nacional, bajo el argumento de que no se consideraba usuraria.

Por tanto, si lo que se debe garantizar son los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar, ante la retención de dinero, del que no va a poder disponer la persona en contra de la cual se promueven, el pago de ellos es únicamente lo que se debe asegurar, por lo que, si la presunta demandada dejó de disponer de una cantidad por el otorgamiento de una medida cautelar, es un evidente que se originaron daños y perjuicios a su favor y para su cálculo es procedente lo señalado por la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio, constituye un indicador adecuado, al señalar que el monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante, ya que integra tanto el valor real del dinero, esto es, los daños que se pudieron ocasionar por la depreciación de la moneda, debido a la inflación, así como el rendimiento que dicha suma pudo generar, es decir, los perjuicios.

Apoya lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2288, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, Décima Época, registro 160424, cuyo rubro:

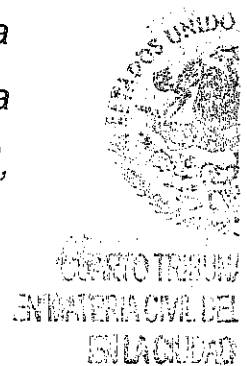
‘DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’

Asimismo, resulta fundado el argumento hecho valer por los ahora quejosos, en el que manifestaron que la autoridad responsable que forzosamente deban garantizar los daños mediante la exhibición de un billete de depósito.

Lo anterior, es así, ya que la autoridad responsable no puede condicionar la exhibición de la multicitada garantía mediante billete de depósito, sino aceptarla en cualquiera de las formas establecidas por la ley, siempre y cuando sea suficiente para asegurar el pago de los daños y perjuicios.

Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 15/2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 419, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Novena Época, registro 175421, de rubro:

'SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR NO DEBE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA QUE EL QUEJOSO HABRÁ DE EXHIBIR PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS, SALVO LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.'



Entonces, resulta incuestionable que la sala responsable conculcó los derechos fundamentales de la parte quejosa, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haberle fijado como garantía la cantidad de seiscientos treinta y cuatro mil trescientos veinticinco pesos 05/100 moneda nacional, de manera discrecional, no prudentemente y sin ser asequible para el solicitante, al haberse fijado en términos del criterio jurisprudencial que menciona en la propia resolución, lo que no fue correcto dado que la garantía para los daños y perjuicio que eventualmente pudieran ocasionarse, deberá ser calculada en base a lo preceptuado en la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio, constituye



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

un indicador adecuado, al señalar que el monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante, que constituye un indicador, ya que la misma integra tanto el valor real del dinero, esto es, los daños que se pudieron ocasionar por la depreciación de la moneda, debido a la inflación, así como el rendimiento que dicha suma pudo generar, es decir, los perjuicios, así como de exigir forzosamente que debía de garantizar los daños mediante la exhibición de un billete de depósito.

EL COLEGADO
PRIMER CIRCUITO
DE MÉXICO

No es óbice para acudir a la jurisprudencia sobre el tema, que las tesis respectivas se hayan emitido en torno a diversa medida cautelar, como lo es la suspensión del acto reclamado en el amparo, puesto que la generación de daños y perjuicios es una posibilidad presente que se establece en el propio Código de Comercio.

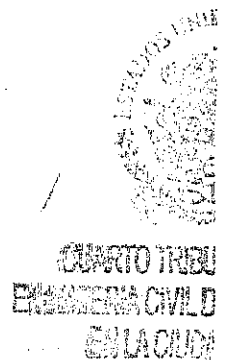
Sobre esa base, debe concederse el amparo y protección solicitados, para el efecto que adelante se precisa.

La decisión así asumida, encuentra plena cabida en el contexto vigente de protección de los derechos de rango máximo, pues al concederse la protección constitucional en los términos que adelante serán concretados, se cumple con el imperativo impuesto en el artículo 1° de la Ley Fundamental, de acatar las obligaciones ahí previstas, en el ámbito de las competencias que corresponden al suscrito titular de este órgano de control, y desde luego, a la autoridad responsable, en la instancia que le corresponda.

El texto de dicho precepto es como sigue:

(Lo transcribe).

Es así, porque en la tutela de los derechos humanos debe lograrse la mayor protección posible de las personas, pero sin que en el cumplimiento de las obligaciones constitucionalmente previstas para el Estado Mexicano, se soslayen las normas que en el derecho interno determinan los procedimientos y competencias de los órganos jurisdiccionales, como tampoco el derecho sustantivo que resulte aplicable, pues si bien conforme a la disposición fundamental que se ha transcrito, todas las autoridades tienen el imperativo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, todo ello está delimitado por el ámbito de sus propias formas y competencias, establecidas para la eficacia de los derechos sustantivos.



Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 202, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006224, de rubro:

'DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.'

En la especie, no se trata de considerar que la delimitación constitucional para el cumplimiento de las obligaciones previstas en materia de derechos humanos, implique



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

027

una restricción para su ejercicio; sin embargo, sí se está en presencia de una norma que posibilita y a su vez condiciona el funcionamiento del sistema diseñado para la tutela de los derechos humanos, y con ello el cabal cumplimiento de tales imperativos, circunscribiendo tal proceder al ámbito competencial de las autoridades del Estado.

Ello, en aras de evitar la inseguridad jurídica que implicaría dotar de eficacia, sin ninguna sujeción, a los que integran el parámetro de regularidad constitucional en el Estado Mexicano, pues de lo contrario se generaría el caos en el sistema, al permitirse que la autoridad, con ese pretexto, actuara fuera de todo control; lo que este juzgador federal no debe propiciar ni permitir; de ahí que lo que ahora se resuelve, se adecue a las normas que delimitan los procedimientos a los que se sujetan las autoridades, conforme a la normatividad aplicable a su proceder.

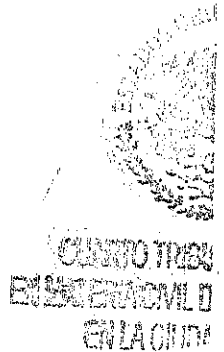
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.5o.C.1 CS (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1722, Libro 20, julio de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, registro 2009563, cuyo rubro:

'DERECHOS HUMANOS. LA PREVISIÓN DE QUE SU TUTELA SÓLO PUEDE DESPLEGARSE EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO NO ES UNA RESTRICCIÓN A SU EJERCICIO, SINO UNA HERRAMIENTA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PARA SU PROTECCIÓN.'

Conforme a ello, ante la existencia del referido mecanismo que propicia el sistema para la protección de los derechos humanos, y en aras de lograr no sólo la vigencia sino también la eficacia de ese parámetro de regularidad, este órgano

de control tiene presente que las normas que delimitan el hacer y modo de actuar de las autoridades del Estado, deben interpretarse de la manera más adecuada para que se cumpla aquella teleología, pues si las leyes que regulan el despliegue de las atribuciones estatales se entendieran sólo conforme a su letra, pudiera incurrirse en el despropósito de sujetar la protección de esos derechos a las reglas ordinarias que a su vez tienen que ser respetuosas de ellos; lo que no puede suceder.

Es cierto que en los últimos tiempos, desde la Ley Fundamental, ha operado una sustancial modificación a la normatividad vigente en el Estado Mexicano, tanto en materia de derechos humanos, como en lo relativo al juicio de amparo, el cual sirve para que los órganos competentes para ello verifiquen el respeto que las autoridades del Estado deben a las normas generales ordinarias que regulan su actuación (control de legalidad), a la Ley Fundamental (control de constitucionalidad) y a los tratados o convenciones internacionales (control de convencionalidad).



De esta manera, todos los órganos del Estado Mexicano, en el ámbito de sus competencias, al resolver los problemas en los que se involucren los derechos humanos, deben atender en principio a los que consagra la Carta Magna, como también a los contenidos en los tratados o convenciones internacionales que se hubieren suscrito en esa materia.

De igual forma, si el propio mandato constitucional determina que la actuación de los órganos del Estado, entre ellos el Poder Judicial de la Federación, debe realizarse en el ámbito de sus competencias, esa aserción implica que previamente se ha delimitado un espacio y las formas en que debe efectuarse tal control sobre la regularidad de los actos de las autoridades del



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

026
aparato estatal, en el que se tome como punto de partida el mencionado parámetro normativo (legal, constitucional y convencional).

En la resolución de los juicios de amparo indirecto, salvo desde luego la real e insoslayable posibilidad de que pudiera desplegarse un control oficioso de convencionalidad, como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben tenerse presentes todas las particularidades que se implican en la emisión de las ejecutorias respectivas; esto es, deben acatarse todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de hacer de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de manera que, so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no pueda separarse de su propio ámbito de competencias, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que le es atribuible.

En ese orden de ideas, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden al suscrito juez de distrito es posible determinar que la autoridad responsable ejecutora debe acatar los lineamientos que se precisan en esta resolución, justamente como efectos para los que se concede la protección constitucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74, fracciones V y VI, y 77, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, la protección constitucional que se otorga es para el efecto de que, siguiendo los lineamientos determinados en esta resolución, la sala responsable con plenitud de jurisdicción, actúe conforme a lo siguiente:

1. Deje sin efectos la resolución de cinco de marzo de dos mil diecinueve, pronunciada en el toca 159/18/1.

2. De conformidad con el artículo 1175, fracción V del Código de Comercio, fije una garantía para asegurar los daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar a la presunta demandada, conforme al precepto antes indicado, lo que deberá hacer en forma debidamente fundada y motivada.

3. Solicitar la exhibición de la garantía por cualquiera de las formas establecidas por la ley, siempre y cuando sea suficiente para asegurar el pago de los daños y perjuicios.

En virtud de lo expuesto, es innecesario abordar el estudio de los demás motivos de disenso expuestos en la demanda de amparo, en virtud de que las violaciones analizadas resultaron suficientes para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal.

Sustenta lo precedente, la tesis de jurisprudencia de la desaparecida Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1498, del Apéndice recientemente citado, Séptima Época, registro 1003214, que indica:

‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja’.”

**TERCERO. Agravio.**

"Único. La resolución impugnada es motivo de un agravio para las quejasas [REDACTED]

[REDACTED] pues resulta contraria a los principios de exhaustividad y de congruencia, así como a los artículos 74 de la Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tal como se demuestra a continuación:

1. Desde el escrito inicial de demanda, en el capítulo correspondiente a las providencias precautorias, mis representadas [REDACTED]

[REDACTED] solicitaron que, por lo que hacía al requisito de otorgar garantía para cubrir los daños y perjuicios que pudieran causarse al demandado, se valorara que, conforme al artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, al estar involucrada una institución de banca múltiple, debían ser consideradas como de acreditada solvencia, de manera que no les era exigible, la exhibición ni presentación de la referida garantía.

2. Así pues, en la demanda de amparo, las quejasas [REDACTED]

[REDACTED] no sólo se dolieron del hecho de que la garantía fijada por la sala responsable fuera desproporcional, sino

MEXICANO
L COLEGADO
PRIMER CIRCUITO
DE NOVIEMBRE

que, de acuerdo con su petición y con el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, ni siquiera resultaba exigible.

3. A pesar de lo anterior, en la sentencia de amparo se omiten estudiar estas consideraciones y, por tanto, en contravención al principio de exhaustividad, se emite una determinación que ningún pronunciamiento realiza sobre la aplicabilidad del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito en la especie, ni sobre la exigibilidad de la garantía referida para las morales actoras.

4. En tal virtud, con el ánimo de mejorar su posición y la protección que obtuvo con la sentencia de amparo, las quejasas

[REDACTED]



[REDACTED] solicitan que pueda abordarse el estudio de los conceptos de violación antes apuntados y, emitiéndose una resolución en la que se declare fundado el presente recurso de revisión, se les exima de presentar la garantía correspondiente, conforme al artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Razones las anteriores suficientes para que, en esta instancia, sus señorías declaren fundado el presente recurso de revisión y, en consecuencia, concedan la petición formulada por

[REDACTED]

CUARTO. Datos relevantes.

En la demanda del juicio ordinario mercantil de origen,



030

las actoras solicitaron las siguientes providencias precautorias:

1. El embargo de [REDACTED]

[REDACTED] en todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, considerada ésta como una universalidad y negociación mercantil, con todos los bienes muebles e inmuebles afectos a la explotación, incluyendo todos los elementos materiales y muebles afectos a la explotación, considerados en su unidad; (ii) el dinero en caja de la explotación corriente; (iii) los créditos a favor del acreditado originados por sus operaciones; y, (iv) los activos totales de su propiedad ubicados dentro de la propiedad industrial citada y...

2. "...así como las cuentas bancarias, inversiones o valores que se encuentren a nombre de la codemandada [REDACTED]

[REDACTED] y de la codemandada [REDACTED] hasta por un monto que baste a garantizar de manera suficiente las prestaciones reclamadas equivalentes a la cantidad total que asciende a \$1'714,392.04 (un millón setecientos catorce mil trescientos noventa y dos pesos 04/100 M.N.), por concepto de suerte principal, así como los intereses moratorios sobre dichas cantidades a una tasa del tres por ciento (3%) mensual; cantidades que deberán congelarse por las instituciones de crédito y ponerse a disposición de este juzgado por medio de billete de depósito, debiéndose apercibir a las instituciones que en caso de desobediencia se harán acreedoras al doble pago, con independencia de las medidas de apremio establecidas por la ley, debiendo permitir las entradas o abonos a las cuentas, pero impidiendo las salidas o disposiciones de las mismas. Las instituciones de crédito

a quienes deberá girarse oficio por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para el congelamiento de las cuentas existentes en su caso, son las siguientes...”.

En relación a las cuentas bancarias, se indicaron cincuenta y dos instituciones financieras con sus respectivos domicilios.

El embargo sería hasta por el monto que bastara para garantizar el pago de \$1'714,392.04 (un millón setecientos catorce mil trescientos noventa y dos pesos 04/100 M.N.) y accesorios.

3. También pidieron la entrega de los bienes arrendados (equipo identificado como CL4-HLE1309AN).

El juez no acogió dichas peticiones.

La parte actora apeló la mencionada determinación e hizo valer los agravios que estimó conducentes, en el sentido de que el juez le había impuesto una carga excesiva, al pretender que acreditara con un estado de cuenta certificado la deuda líquida y exigible que había demostrado con la forma escrita del contrato de arrendamiento y que, la exhibición del referido estado de cuenta tampoco era un requisito que la ley estableciera para que se hiciera la devolución del equipo arrendado.

En la resolución reclamada que fue motivo de análisis (por virtud de la omisión en el estudio de los conceptos de violación en que incurrió el juez de distrito en el juicio de amparo correspondiente) en el recurso de revisión RC-264/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, se confirmó el auto que negó las providencias precautorias y la devolución de equipo arrendado.





En la ejecutoria de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve dictada en el recurso de revisión mencionado, se concedió la protección constitucional para el efecto de que la sala responsable:

1. Dejara insubsistente el fallo reclamado, y

2. Dictara otra sobre la base de lo considerado en esta ejecutoria para estimar que:

2.1. El requisito relativo a que la parte solicitante de las medidas precautorias manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, no implica que la parte solicitante deba acreditar tal manifestación, sino que en realidad únicamente se trata de expresar, bajo protesta de decir verdad, el desconocimiento de "*bienes conocidos*" del deudor.

2.2. La retención puede hacerse sobre los bienes que sean necesarios para garantizar el adeudo y no solamente uno.

2.3. En cuanto a la medida de retención de dinero en cuentas bancarias; la ley no contempla la obligación de especificar los números de las cuentas a nombre del demandado, sobre los cuales debe recaer la medida cautelar solicitada.

3. Por lo que, sin exigir los elementos mencionados, el tribunal de alzada responsable debería analizar si proceden las providencias precautorias solicitadas.

4. De estimar que son procedentes tales providencias, no debía haber excesos en el otorgamiento de éstas, sino que la

intervención y/o embargo debían ser exclusivamente sobre lo que garantice el adeudo reclamado.

El fallo dictado en cumplimiento de la ejecutoria mencionada constituye el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto de origen promovido por la parte actora.

El juez federal otorgó la protección constitucional sobre la base de que, fundada y motivadamente, el tribunal de alzada habrá de analizar los agravios para *"fijar una garantía para asegurar los daños y perjuicios que se le pudiera ocasionar a la presunta demandada"*, en conformidad con el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio.

QUINTO. Estudio. Los agravios son ineficaces para revocar o modificar el fallo impugnado.

CUARTO TRIBUNAL
JURISDICCIONAL CIVIL DEL
ESTADO DE GUATEMALA

Se tiene que la causa de pedir de la demanda de amparo esencialmente se sustentó en que, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, la sala responsable debió eximir a las quejas de constituir depósitos o fianzas, para garantizar el otorgamiento de las medidas precautorias.

Si bien es cierto que el juez federal otorgó la protección constitucional sobre la base de que, fundada y motivadamente, el tribunal de alzada habrá de analizar los agravios para *"fijar una garantía para asegurar los daños y perjuicios que se le pudiera ocasionar a la presunta demandada"*, en conformidad con el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio; lo cierto es que, como lo aducen las recurrentes, la juez de amparo no dio respuesta al concepto de violación precisado en párrafos precedentes, el cual es el planteamiento esencial que se hizo valer en la demanda de amparo; por lo que, para subsanar la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

omisión, por virtud de la alzada, este tribunal se avoca al estudio de esa precisa alegación.

032

Aplicación directa del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Se hace notar que el juicio de amparo del que proviene el presente recurso fue promovido por dos personas morales, a saber, una institución bancaria [REDACTED] y una sociedad de responsabilidad limitada [REDACTED]

Como se observa, en la demanda de amparo, las quejas alegan expresamente, que al caso concreto, la Ley de Instituciones de Crédito no es aplicable de manera supletoria, sino de manera directa.

Sin embargo, no hay algún dato en las constancias que integran este recurso en el cual se advierta que [REDACTED] sea integrante del sistema bancario mexicano, en términos del artículo 2º de la Ley de Instituciones de Crédito y que, por ende, dicha sociedad de responsabilidad limitada no se encuentre en el supuesto del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito; por lo que, en consecuencia, ha lugar a confirmar la sentencia recurrida en cuanto a la referida persona jurídica.

De esta manera, todo lo que se expondrá tiene que ver con el planteamiento del banco.

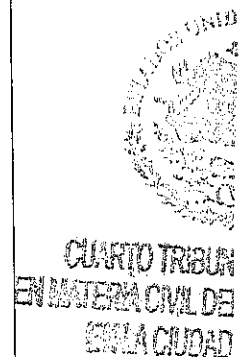
Este tribunal colegiado considera que, opuestamente a lo aducido por el banco quejoso, no es aplicable el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito al juicio ordinario mercantil de origen. La disposición aplicable es la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio.



COLEGADO
PRIMER CIRCUITO
DE MÉXICO

Los preceptos mencionados prevén:

Artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio.	Artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito.
<p>“Artículo 1,175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: (...) V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte.</p> <p>El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante.” (Énfasis añadido).</p>	<p>“Artículo 86.- Mientras los integrantes del Sistema Bancario Mexicano, no se encuentren en liquidación o en procedimiento de quiebra, se considerarán de acreditada solvencia y no estarán obligados a constituir depósitos o fianzas legales, ni aún tratándose de obtener la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de garantizar el interés fiscal en los procedimientos respectivos.” (Énfasis añadido).</p>



En una comparación inicial, basta dar lectura al artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, para observar que, con independencia de lo determinado específicamente para la materia fiscal, dicho precepto se refiere a la excepción de los bancos de dar depósitos o fianzas legales.

En conformidad con lo planteado, se da un conflicto de normas entre el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, y el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que la primera disposición impone al promovente de providencias precautorias, la carga de otorgar garantía respecto de los daños y perjuicios que pudiera sufrir el deudor, es decir, la parte contra la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

033

que se dirigen tales providencias; en cambio, el segundo precepto exime de esa carga a los integrantes del sistema bancario, como el banco quejoso.

Antinomia.

El principio de coherencia normativa concibe al sistema jurídico como un todo unitario, en el que las partes se encuentran en plena armonía, y su aplicación individual o conjunta concurre vigorosamente al cuidado y fortalecimiento de los valores tutelados por ellas, y a la satisfacción óptima de los fines perseguidos.

AL COLEGIADO
PRIMER CIRCUITO
DE MÉXICO

Empero, como toda obra humana, la del legislador es susceptible de incurrir en imperfecciones, como la de expedir disposiciones total o parcialmente contrarias o contradictorias, para su aplicación a un mismo supuesto fáctico de las relaciones humanas, con lo que se suscitan los llamados conflictos normativos o antinomias jurídicas, reveladoras de inconsistencias que, mientras no las corrija su autor, requieren de una solución satisfactoria de los operadores jurídicos, especial y terminalmente de los órganos jurisdiccionales, para su aplicación a los casos concretos.

Dicho de otra manera, existe una antinomia cuando dos normas del mismo sistema jurídico regulan un mismo supuesto de hecho de manera diferente e incompatible. La antinomia equivale a inconsistencia o contradicción entre las normas respectivas.

La solución a las antinomias puede encontrarse mediante la aplicación de dos fórmulas.

La primera consiste en proceder a hacer un análisis penetrante de los enunciados que se vislumbran en conflicto, con el fin de determinar si cabe la posibilidad de asegurar a cada una un campo material o temporal distinto de aplicación, con lo que el enfrentamiento se evita y queda sólo en los terrenos de la forma o la apariencia.

La segunda se dirige a la prevalencia de una de las disposiciones discrepantes en el sistema jurídico, y la desaplicación de la otra. Para este efecto, la doctrina y la jurisprudencia han venido proveyendo de métodos o criterios para justificar la desaplicación, con base en ciertas características que concurren en cada antinomia. En esa situación, el conflicto formal o aparente se confirma en la realidad. En esta línea son del conocimiento general los criterios clásicos o tradicionales de solución de antinomias, bajo la denominación de criterios jerárquico, de especialidad y cronológico. En época reciente se han venido acuñando algunos otros.



Entre las dos fórmulas indicadas, siempre se ha considerado mucho más conveniente, la primera, porque con ella se consigue conservar en su integridad la obra del legislador y se conjura toda posibilidad de confrontación entre los poderes estatales, al mantener nítidamente a cada uno dentro del ámbito de sus atribuciones naturales.

En atención a lo anterior, los operadores jurídicos, sobre todo los órganos jurisdiccionales, deben dirigir y optimizar al máximo sus esfuerzos, en primer lugar, a la búsqueda de la aplicación de esa primera fórmula, para lo que pueden emplear las valiosas herramientas constituidas por los **métodos de interpretación jurídica**, y sólo si no encuentran posibilidades de



034

evitar la confrontación, deben pasar a los criterios aplicables para resolver el conflicto, por la vía de la desaplicación de alguna de las reglas desavenidas; e inclusive, si en una actuación subsecuente encuentran facticidad para la primera fórmula, deben dar marcha atrás y decidirse por ella¹

Herramientas para la solución de antinomias.

En el presente caso, no se advierte una solución para lograr que las disposiciones citadas puedan surtir plenos efectos jurídicos puesto que no se encuentra alguna manera para conciliar, la imposición de la carga que impone a los promoventes de las providencias precautorias con la exención que para los integrantes del sistema bancario prevé la Ley de Instituciones de Crédito, ya que aun cuando este último precepto se refiere a depósitos o fianzas es patente que tales conceptos admiten quedar comprendidos en la expresión "garantías".

La dificultad se produce no solamente por la circunstancia de que un precepto exige otorgar y el otro exime, sino porque las disposiciones pertenecen a ordenamientos de sistemas distintos, en el que, uno de ellos es, además, de carácter instrumental (la parte del Código de Comercio que regula los procesos).

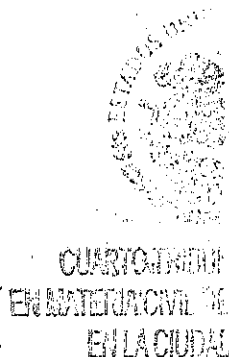
De ahí que sea necesario tratar de solucionar la antinomia a través de los criterios tradicionales, como son los criterios:

¹ Lo anterior tiene sustento en la tesis de este órgano jurisdiccional publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 2790, de rubro: "ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. INTERPRETACIÓN DE LOS ENUNCIADOS NORMATIVOS COMO MÉTODO DE PREVENCIÓN". Registro 165343.

- a) Jerárquico.
- b) Cronológico y
- c) De especialidad.

Este tribunal se ha expresado al respecto en la tesis de ejecutoria cuyo rubro es: "ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. CRITERIOS DE SOLUCIÓN"².

² Tesis de este tribunal colegiado identificada como I.4º.C.220 C: "ANTINOMIAS O CONFLICTOS DE LEYES. CRITERIOS DE SOLUCIÓN, se hace mención de las definiciones de los citados métodos: "La antinomia es la situación en que dos normas pertenecientes a un mismo sistema jurídico, que concurren en el ámbito temporal, espacial, personal y material de validez, atribuyen consecuencias jurídicas incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, y esto impide su aplicación simultánea. Antes de declarar la existencia de una colisión normativa, el juzgador debe recurrir a la interpretación jurídica, con el propósito de evitarla o disolverla, pero si no se ve factibilidad de solucionar la cuestión de ese modo, los métodos o criterios tradicionales de solución de antinomias mediante la permanencia de una de ellas y la desaplicación de la otra, son tres: 1. criterio jerárquico (lex superior derogat legi inferiori), ante la colisión de normas provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical o dispuestas en grados diversos en la jerarquía de las fuentes, la norma jerárquicamente inferior tiene la calidad de subordinada y, por tanto, debe ceder en los casos en que se oponga a la ley subordinante; 2. Criterio cronológico (lex posterior derogat legi priori), en caso de conflicto entre normas provenientes de fuentes jerárquicamente equiparadas, es decir, dispuestas sobre el mismo plano, la norma creada con anterioridad en el tiempo debe considerarse abrogada tácitamente, y por tanto, ceder ante la nueva; y, 3. Criterio de especialidad (lex specialis derogat legi generali), ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional), prevalece la segunda, el criterio se sustenta en que la ley especial substrahe una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentación diversa (contraria o contradictoria). En la época contemporánea, la doctrina, la ley y la jurisprudencia han incrementado la lista con otros tres criterios. 4. Criterio de competencia, aplicable bajo las circunstancias siguientes: a) que se produzca un conflicto entre normas provenientes de fuentes de tipo diverso; b) que entre las dos fuentes en cuestión no exista una relación jerárquica (por estar dispuestas sobre el mismo plano en la jerarquía de las fuentes), y c) que las relaciones entre las dos fuentes estén reguladas por otras normas jerárquicamente superiores, atribuyendo -y de esa forma, reservando- a cada una de ellas una diversa esfera material de competencia, de modo que cada una de las dos fuentes tenga la competencia exclusiva para regular una cierta materia. Este criterio guarda alguna semejanza con el criterio jerárquico, pero la relación de jerarquía no se establece entre las normas en conflicto, sino de ambas como subordinadas de una tercera; 5. Criterio de prevalencia, este mecanismo requiere necesariamente de una regla legal, donde se disponga que ante conflictos producidos entre normas válidas pertenecientes a subsistemas normativos distintos, debe prevalecer alguna de ellas en detrimento de la otra, independientemente de la jerarquía o especialidad de cada una; y, 6. Criterio de procedimiento, se inclina por la subsistencia de la norma, cuyo procedimiento legislativo de que surgió, se encuentra más apegado a los cánones y formalidades exigidas para su creación. Para determinar la aplicabilidad de cada uno de los criterios mencionados, resulta indispensable que no estén proscritos por el sistema de derecho positivo rector de la materia en el lugar, ni pugnen con alguno de sus principios esenciales. Si todavía ninguno de estos criterios soluciona el conflicto normativo, se debe recurrir a otros, siempre y cuando se apeguen a la objetividad y a la razón. En esta dirección, se encuentran los siguientes: 7. Inclinar por la norma más favorable a la libertad de los sujetos involucrados en el asunto, por ejemplo, en el supuesto en que la contienda surge entre una norma imperativa o prohibitiva y otra permisiva, deberá prevalecer esta última. Este criterio se limita en el caso de una norma jurídica bilateral que impone obligaciones correlativas de derechos, entre dos sujetos, porque para uno una norma le puede ser más favorable, y la otra norma favorecerá más la libertad de la contraparte. Para este último supuesto, existe un diverso criterio: 8. En éste se debe decidir a cuál de los dos sujetos es más justo proteger o cuál de los intereses en conflicto debe prevalecer; 9. Criterio en el cual se elige la norma que tutele mejor los intereses protegidos, de modo que se aplicará la que maximice la tutela de los intereses en juego, lo que se hace mediante un ejercicio de ponderación, el cual implica la existencia de valores o principios en colisión, y por tanto, requiere que las normas en conflicto tutelen o favorezcan al cumplimiento de valores o principios distintos; y, 10. Criterio basado en la distinción entre principios y reglas, para que prevalezca la norma que cumpla mejor con alguno o varios principios comunes a las reglas que estén en conflicto. Esta posición se explica sobre la base de que los principios son postulados que persiguen la realización de un fin, como expresión directa de los valores incorporados al sistema jurídico, mientras que las reglas son expresiones generales con menor grado de abstracción, con las que se busca la realización de los principios y valores que las informan; de manera que ante la discrepancia entre reglas tuteladas de los mismos valores, debe subsistir la que mejor salvaguarde a éste, por ejemplo si la colisión existe entre normas de carácter procesal, deberá resolverse a favor de la que tutele mejor los elementos del debido proceso legal". Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero de 2010, página 2788. Registro 165344.





Jerarquía [*lex superior derogat lex inferiori*]. Ante la colisión de normas provenientes de fuentes ordenadas de manera vertical o dispuestas en grados diversos en la jerarquía de las fuentes, la norma jerárquicamente inferior tiene la calidad de subordinada y, por tanto, debe ceder en los casos en que se oponga a la ley subordinante. Es decir, prevalece la disposición de mayor rango.

La imposibilidad de aplicar este criterio se presenta en este caso, porque los preceptos que contienen provienen de distintos sistemas normativos: uno, relacionado con el servicio público de impartición de justicia y que, por tanto, se refiere a la instrumentación de solución de controversias en el ámbito de la jurisdicción, en tanto que la otra disposición se relaciona con la actividad de la banca.

Ambos ordenamientos se integran con leyes en sentido formal y material y no se advierte alguna razón válida para decir que un cuerpo de dichas leyes está jerárquicamente por encima del otro, dado que sus ámbitos materiales de validez son diferentes.

Criterio cronológico [*lex posterior derogat legi legi priori*]. En caso de conflicto entre normas provenientes de fuentes jerárquicamente equiparadas, es decir, dispuestas sobre el mismo plano, la norma creada con anterioridad en el tiempo debe considerarse abrogada tácitamente, y por tanto, ceder ante la nueva.

Artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito.	Artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio.
18 de julio de 1990. En el Tomo CDXLII, número 13, del Diario Oficial de la Federación se publica la Ley de Instituciones de Crédito .	10 de enero de 2014. En el Tomo DCCXXIV, número 8, del Diario Oficial de la Federación, se publica el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera. Concretamente, en el artículo vigésimo segundo se dispone que se reforma el artículo 1175 del Código de Comercio , antes de esa reforma, el citado precepto disponía: <i>"En el caso del artículo anterior, la providencia se reducirá á prevenir al demandado que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo, suficientemente instruido y expensado, para responder á las resultas del juicio"</i> .

De esta manera, se estima que en conformidad con el criterio cronológico, la norma creada con anterioridad en el tiempo, es decir, el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, publicada el dieciocho de julio de mil novecientos noventa, debe considerarse derogada tácitamente y, por tanto, ceder ante la disposición nueva, esto es, el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, que surgió el diez de enero de dos mil catorce.

CUARTO TRIBUNAL
EN MATERIA CIVIL
EN LA CIUDAD

A primera vista parece que sobre la base del criterio cronológico, el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio, debería prevalecer sobre el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Especialidad [*lex specialis derogat legi generali*].

Ante dos normas incompatibles, una general y la otra especial (o excepcional) prevalece la segunda. El criterio se sustenta en que



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

036

la ley especial substraer una parte de la materia regida por la de mayor amplitud, para someterla a una reglamentación diversa (contraria o contradictoria).

Si se toma en cuenta a los sujetos a quienes se destinan las disposiciones en comento se encuentra, que el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito se refiere a los integrantes del sistema bancario, en tanto que la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio se dirige específicamente a los promoventes de medidas cautelares.

Si se atiende a la materia sobre la que operan los preceptos, el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito se refiere a toda clase de juicios, incluido el juicio de amparo y la materia fiscal, en cambio el precepto procesal se centra en una clase particular de juicio como es el juicio cautelar, previsto en el Código de Comercio.

De esta manera, la ley particular derogaría a la más general.

En resumen, los criterios cronológico y de especialidad servirían de sustento para considerar, que ante la antinomia que se analiza debe prevalecer la disposición del Código de Comercio y, por ende, no cabría aplicar el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Debe reconocerse, sin embargo, que los referidos criterios para la solución de antinomias son relativos y, en un momento dado, pueden parecer discutibles los referentes que se

AL COLEGIADO
PRIMER CIRCUITO
DEL MÉXICO

toman para aplicar cada uno de esos criterios, lo cual es común que ocurra cuando, como en el caso, los preceptos se encuentran en ordenamientos de sistemas distintos³.

Por tal razón, es aconsejable acudir a otros criterios.

En el presente caso, se considera que con independencia de los mencionados criterios cronológico y de especialidad, se encuentra que es más apegada a la Constitución la aplicación de la disposición que se encuentra en el Código de Comercio.

Dicho precepto está integrado en las normas procesales del Código de Comercio que regulan a los juicios mercantiles.



Específicamente, dicha disposición forma parte de la regulación del juicio cautelar.

Por tanto, si se trata de un proceso cautelar debe tenerse en cuenta lo preceptuado en el artículo 17 constitucional en dos aspectos específicos, a saber:

a) El derecho a la ejecución de las sentencias que resuelven un juicio (antepenúltimo párrafo del artículo 17 constitucional) y

b) El principio de igualdad que debe regir entre las partes que participan (párrafo tercero del artículo 17 constitucional).

³ BOBBIO, Norberto. Teoría General del Derecho, Tercera Edición, Themis, Bogotá, Colombia, 2007. Párrafo 69, páginas 200 y siguientes.



Las instituciones bancarias que promueven un juicio cautelar lo hacen en ejercicio del derecho que tienen a que la sentencia que se llegue a dictar en el juicio que tenga como antecedente un proceso cautelar, admita ejecutarse sin dificultad.

En tal virtud, ante la demostración de la buena apariencia del derecho y del peligro en la demora por la duración de los juicios, la ley les anticipa efectos que son propios de la eventual sentencia estimatoria que se llegue a dictar en el juicio respectivo, con la finalidad de que tal fallo se ejecute fácilmente.

Con la ejecución del fallo estimatorio correspondiente queda satisfecha la completa solución de una controversia, decidida en el ámbito jurisdiccional.

Debe tenerse en cuenta que para la satisfacción de ese derecho, se sacrifica, en parte, el derecho del sujeto al que la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio denomina "deudor", ya que con la expedición de las medidas cautelares se afectan derechos tales como la propiedad y la posesión.

El denominado "deudor" debe soportar esa afectación, en aras de que se realice la impartición de justicia completa, con la ejecución del fallo que resuelva la controversia en el proceso distinto al cautelar.

Pero en cambio, la ley compensa a dicho "deudor" con la carga que impone al promovente de las providencias precautorias de garantizar la indemnización por los daños y perjuicios que puedan ocasionar esas providencias solicitadas, en términos de lo

previsto en la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio.

Esta imposición para el promovente de las providencias precautorias implica la carga que le incumbe soportar para obtener los efectos que, en principio, solo habría podido producir un eventual fallo estimatorio.

Con lo que corresponde a cada parte del proceso cautelar, la ley mercantil trata de cumplir con el principio de igualdad procesal, ya que a ambas partes les impone una carga: al "deudor" la afectación de su propiedad y posesión. Al promovente de las providencias cautelares, la exigencia de garantizar la indemnización de posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el "deudor" con las providencias cautelares.

Es verdad, que en principio, la garantía tiene que ver con la solvencia del sujeto a quien se impone su otorgamiento; sin embargo, es patente que la garantía no se relaciona exclusivamente con esa solvencia, sino con las facilidades previstas en la ley para que "el deudor" obtenga fácilmente el cumplimiento de la obligación. Es patente que hay mucha diferencia, por ejemplo, en un crédito que se otorga sin garantía alguna a que cuando se exige al deudor, por ejemplo, hipoteca, fideicomiso, etcétera.

Se hace referencia a estas últimas garantías, porque con ellas queda muy clara la facilidad que tiene el acreedor, no solamente para asegurar el crédito, sino la facilidad de los procesos previstos en la ley cuando se hacen efectivas esas garantías.



CUARTO TRIBUNAL
CIVIL DEL
ESTADO



Lo anterior pone de manifiesto que si se inobservara la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio y, en su lugar se aplicara el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito, se rompería el principio de igualdad entre las partes, que procura observar el primero de los citados preceptos, y esto conduciría a la infracción del tercer párrafo del artículo 17 constitucional, dado que no habría igualdad, si una de las partes tuviera que resentir todas las cargas y la otra estuviera exenta de éstas.

Es ilustrativa al respecto la exposición de motivos del Código Federal de Procedimientos Civiles⁴ que de manera clara explica lo que persigue dicho ordenamiento (supletorio del Código de Comercio) con el principio de igualdad procesal.

“... el principio de igualdad, que esencialmente consiste en que el proceso debe desenvolverse sin consideración alguna personal, de manera que pudieran perfectamente invertirse las posiciones de las partes, sin sufrir alteración, de ninguna índole, ni el desarrollo procesal, en sí mismo, ni el sentido de la resolución final del caso controvertido, principio éste que se desenvuelve y perfecciona al equiparar a la Federación misma con un simple particular, según lo que se previene en el artículo 4.”

Como se advierte, lo que se pretende con la observancia del principio de igualdad es que:

1. Por cuanto hace a las partes, el proceso se desenvuelva sin consideración personal alguna.

2. El parámetro para constatar la igualdad de las partes en el proceso es que si las posiciones de éstas se invirtieran, ninguna de ellas sufriría alteración de alguna índole, ya sea en el curso del proceso en sí mismo, o en la resolución final del litigio.

⁴ Publicada en el número correspondiente al Diario Oficial de la Federación, 13 de marzo de 1943, Tomo CXXXVII, número 12, pp. 1-53.

3. Por esta razón en el artículo 4 de dicho ordenamiento se encuentra la regla general de equiparar a la federación con cualquier particular.

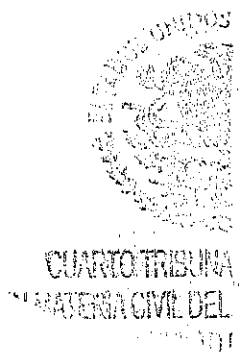
Lo anterior lleva a considerar que en un proceso, incluido, el cautelar, no debe partirse de la base de que las instituciones bancarias gozan de una cualidad que las hace distintas a su contraparte y que, por esa razón, están eximidas de cumplir con la carga procesal de otorgar garantías que aseguren la indemnización por los daños y perjuicios que pudieran causarse con las providencias cautelares.

Si, como dice la exposición de motivos, en un proceso cautelar como el del caso, las posiciones de las partes se invirtieran y fuera un particular el solicitante de las providencias precautorias, en contra de un banco, aquél tendría la carga de exhibir la garantía a que se refiere la ley.

Entonces, no se ve por qué el banco no tiene que hacer lo propio, cuando es el que solicita las medidas cautelares.

Eximir al banco sería incumplir, con la ley procesal mercantil, al infringir el parámetro que propone la exposición de motivos citada para ilustrar el cumplimiento del principio de igualdad procesal de las partes.

Si como también se vio, la ley procuró que incluso la Federación estuviera sujeta al principio de igualdad procesal, por mayoría de razón, una institución bancaria debe someterse también a ese principio, dado que ninguna base lógica o jurídica hay para decir que un banco está por encima de la Federación.





039

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Incluso este punto de vista se encuentra reforzado por lo dispuesto en el artículo 1º constitucional.

El principio de igualdad de las partes en un proceso se encuentra garantizado en el tercer párrafo del artículo 17 constitucional.

De modo que si con la aplicación de la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio se logra la mayor efectividad del principio de igualdad procesal garantizado en el artículo 17 constitucional, en conformidad con el artículo 1º de la propia Carta Magna, debe preferirse el precepto que maximiza dicho principio de igualdad.

En consecuencia, si con la aplicación del artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito se demerita el principio de igualdad a que se refiere el artículo 17 constitucional, el conflicto de normas queda resuelto al desaplicar dicho artículo 86 y, en su lugar, atender lo que dispone la fracción V del artículo 1175 del Código de Comercio.

Por ende, al no acogerse los planteamientos de los inconformes, la resolución recurrida debe permanecer incólume y, por tanto, ha lugar a confirmarla.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 a 93 de la Ley de Amparo, 35 y 37 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:


ÚNICO. Se **confirma** la sentencia recurrida de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, engrosada el diecisiete de septiembre siguiente, dictada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo

indirecto 299/2019, que concedió la protección constitucional.

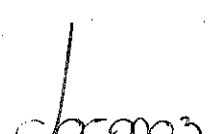
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de distrito que los remitió y, en su oportunidad, archívese este tomo como asunto concluido.


Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados Mauro Miguel Reyes Zapata, como presidente, María Amparo Hernández Chong Cuy y Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo. Firman la sentencia todos los nombrados, ante el secretario de acuerdos, quien da fe.


MAGISTRADO PRESIDENTE
MAURO MIGUEL REYES ZAPATA


MAGISTRADA
MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ
CHONG CUY


MAGISTRADA
ETHEL LIZETTE DEL CARMEN
RODRÍGUEZ ARCOVEDO


SECRETARIO DE ACUERDOS
ARMANDO LOZANO ENCISO


CUARTO TRIBUNAL
EN MATERIA CIVIL DEL I



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

040

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA PARTE FINAL DE LA SENTENCIA
DICTADA EN EL AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO 2302

RESOLVIO: CONFIRMAR LA SENTENCIA RECURRIDA QUE CONCEDIÓ
LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.

ESTA SENTENCIA SE TERMINÓ DE ENGROSAR Y FUE FIRMADA EL

21 NOV 2019

CONSTE.

21 NOV 2019

EN EL SECRETARIO DE ACUERDOS HACE
CONSTAR: QUE EN ESTA FECHA SE RECIBIÓ EN LA SECRETARÍA EL
PRESENTE EXPEDIENTE POR PARTE DE LA PONENCIA. CONSTE.

MDP/jr



COLEGIO
MEXICANO

Siendo las nueve horas del 25 NOV 2019
con fundamento en el artículo 26, fracción III, de
la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a las
partes, la resolución de 07 NOV 2019,
la cual se fija en los estrados de este tribunal y a
través de la página electrónica del Poder Judicial
de la Federación con la siguiente dirección:
www.dgepj.cjf.gob.mx. Lo anterior, con excepción
de la(s) autoridad(es) responsable(s) y aquella
que se haya ordenado de manera distinta. Doy fe.

EL (LA) ACTUARIO(A)

LIC. TERESA

HERNÁNDEZ GARCÍA

ACTUARÍA

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: RespuestaAcuerdo.pdf
Secuencia: 3149513

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	Maria Belinda Pacheco Castillo	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	PACB750526MDFCSL07			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66000000000000000000000000000008c8a	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	05/03/2020T21:40:59Z / 05/03/2020T15:40:59-06:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	7a d6 f0 94 1a b2 75 86 c8 e9 39 bf e3 4f ba 30 a4 85 4e 16 ba 00 86 9e 38 c6 69 ab 2b 51 11 e5 a7 16 dc 0c 3d f5 ef 84 f9 4e ea 89 df cb 35 c3 16 b5 a9 68 3e f5 a9 41 c4 99 48 4a 7a 53 63 93 5b 17 9f ef 36 9c 16 43 dd 12 eb 83 8b c1 7a 8e d2 34 dd 63 0c 3e 86 92 14 4d f3 19 63 c6 63 ca ae 05 a6 20 66 7d 49 97 71 6e 61 70 0f bb 2a 98 b2 19 eb b9 ec 2b cf 25 e0 3f f7 eb 0e 7c 73 78 c6 5d 24 04 0c de c6 4e 5a 1b 07 20 48 5f 25 fa 69 fc 8e 5b 78 5c a5 be b8 09 b0 ee 15 2d 10 d0 6e eb b4 7e 15 82 de f5 e4 e1 b6 2b 61 97 30 09 e4 f1 61 03 7a 8e 5f 6e e0 79 98 07 28 ec a0 91 67 a0 da cc a5 cf 65 06 dc 82 af c1 80 ff 3d 41 b3 4a d2 d4 7c 0e 73 1e 89 35 c6 1f 13 95 70 08 8a 11 59 00 dd 4a 3e b9 5d 88 9f 47 ff 89 92 6e b1 11 9b 03 a0 2a cf f1 85 f0 02 22 cc 87 c3 ac			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	05/03/2020T21:40:19Z / 05/03/2020T15:40:19-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66000000000000000000000000000008c8a			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	05/03/2020T21:40:59Z / 05/03/2020T15:40:59-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	3153460			
	Datos estampillados:	6ACEDD0AEFF2544FEDD488C40D8238E83698A916			